

Septiembre 24 de 1958

57ª REUNION — 51ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los doctores JOSE MARIA GUIDO y BENJAMIN GUZMAN, presidente provisional y vicepresidente 1º del Honorable Senado, respectivamente

Secretarios: señores LUIS ABEL VISCAY y PEDRO OSVALDO SBARRA

Prosecretarios: señores NOE JITRIK y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro
BAYOL, Augusto G.
BAZAN, Eduardo
BERTIN, Alfredo Felipe
BERTORA, José María Antonio
BIAIN, Pablo
CALDERON, Segundo Rosa
CIARLOTTI, Pedro Antonio
DAVILA, J. Aníbal
DE LLAMAS, Enrique V.
DÍAZ, Juan Luis
FALCO, Clodomiro
FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio
FIGUEROA, Héctor F.
FITTIPALDI, Juan Pablo
FLEITAS, Víctor Hugo
GALLO, Victorio Manuel
GARCIA, Alfredo
GÓMEZ, Carlos Bernabé
GUIDO, José María
GUZMAN, Benjamin
ITURRALDE, Antonio
JUAREZ, José Gregorio
LEAVEY, Napoleón Tomás
LEBRERO, Carlos Alberto
MALLEVILLE, Julio A.
MANSILLA, Juan Argentino
MELANI, Francisco José

NOGUEIRA, Eduardo
PARRA PÉREZ, Diego
PÉREZ, Bartolomé
RACEDO, Lucio E.
RICA, Diego Isidro
ROCHA ERRECART, Adolfo
SANCHEZ, Franklin Alberto
TURANO, Armando Luis
VERA BARROS, Pedro César
VILCHEZ, Martín
VILLALBA, Lucas
WEIDMANN, Rodolfo A.

AUSENTES, CON AVISO:

CANEQUE, Francisco E.
TRUNSKY, Salomón

SUMARIO

-
- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 1797.)
 - 2.—Asuntos entrados:
 - I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados (Página 1797.)
 - II.—Comunicación oficial. (Página 1797.)
 - III.—Despachos de comisiones. (Página 1797.)
 - IV.—Peticiones particulares. (Página 1798.)
 - 3.—Proyecto de comunicación del senador Díaz sobre construcción de un hotel y una hostería en Clorinda (Formosa). (Página 1798.)

- 4.—Proyecto de ley del senador Bayol, sobre creación del Colegio Nacional Normal Mixto de Maestros, en Alcorta (Santa Fe). (Página 1798.)
- 5.—Proyecto de ley del senador Leavy, sobre terminación de obras y habilitación del templo de Nuestro Señor del Milagro y casa parroquial, de Metán (Salta). (Página 1799.)
- 6.—Proyecto de ley de los senadores Leavy y Trunsky, sobre creación de una escuela hogar en Tolar Grande (Salta). (Página 1799.)
- 7.—Proyecto de ley del senador Weldmann, sobre creación de la Junta Nacional del Algodón. (Página 1800.)
- 8.—Proyecto de comunicación del senador Figueroa, sobre oficialización de la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, de Marcos Juárez (Córdoba). (Página 1803.)
- 9.—Continúa la consideración del proyecto de ley de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública por el que se crea el Consejo Nacional de Especialidades Medicinales. Se aprueba con modificaciones. (Página 1803.)
- 10.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se destinan \$ 5.000.000 para cubrir gastos de propaganda y difusión en el pabellón argentino de la Exposición Universal e Internacional de Bruselas. Se aprueba. (Página 1803.)
- 11.—Consideración del despacho de las comisiones de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se amplía hasta el 30 de septiembre de 1959 el plazo fijado por el artículo 10 de la ley 14.408, prorrogado por el decreto ley 4.908/58. Se aprueba. (Página 1805.)
- 12.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley, en revisión, sobre derogación del decreto ley 512/58, por el que se ratificó el tratado inter-estatal de creación de la Corporación Nordpatagónica. Se aprueba. (Página 1806.)
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los senadores García, Melani y Turano, por el que se establecen nuevos precios de suscripción al Diario de Sesiones. Se aprueba. (Página 1811.)
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del senador Dávila, sobre inscripción de las sociedades cooperativas y mutuales de seguros en el Registro de Entidades de Seguros. Se aprueba. (Página 1813.)
- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Industria en el proyecto de ley del senador Bayol, por el que se crea el Consejo Nacional de la Calidad Industrial. Se aprueba. (Página 1817.)
- 16.—Consideración del proyecto de ley de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública por el que se acuerda un subsidio extraordinario al Instituto de Maternidad Pedro A. Pardo, de la Capital Federal. Se aprueba. (Página 1820.)
- 17.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en los proyectos de ley del senador Nogueira, y de los senadores Lebrero y Pérez por los que se acuerdan recursos para la construcción de obras públicas nacionales y subsidios para construcción de obras públicas provinciales. Se aprueba. (Página 1822.)
- 18.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del senador Vera Barros, por el que se acuerda a la provincia de La Rioja, como aporte nacional, la suma de \$ 27.000.000 para construcciones aeronáuticas. Se aprueba. (Página 1825.)
- 19.—Consideración del despacho de la Comisión de Industria en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) —Mina Farallón Negro—. (Página 1831.)
- 20.—A moción del senador Fleitas, se resuelve pasar a cuarto intermedio. (Página 1849.)
- 21.—Continúa la consideración del despacho de comisión a que se refiere el número 19 de este sumario. Se aprueba con modificaciones. (Página 1849.)
- 22.—Consideración del despacho de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se acuerda al departamento de oncología del Hospital Regional Provincial de Río Cuarto (Córdoba), la suma de \$ 1.000.000 para adquirir un equipo de radioterapia. Se aprueba. (Página 1858.)
- 23.—Consideración del despacho de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del senador García, sobre cómputo de servicios prestados, como meritorios, por los aprendices de la Escuela Industrial de la Nación en los talleres del Ferrocarril General Belgrano en Taíí Viejo (Tucumán), a los efectos de la ley 10.650. Se aprueba. (Página 1860.)
- 24.—Consideración del despacho de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el que se acuerda pensión a doña Sara Yrigoyen, a doña Agustina Nowel de Coulin y a doña Dora Dana de Lebensohn. Se aprueba. (Página 1861.)

Comodoro Rivadavia, Sauce Viejo, Fisherton y Río Gallegos e inició obras en Catamarca. En el mismo período el Ministerio de Transportes realizó las siguientes obras: en Resistencia, pista pavimentada; en Lago Argentino, ampliación de pistas y pista nueva; en Tucumán, Tartagal, Orán, Monte Caseros, San Luis, ampliación de pistas; en Santa Rosa, construcción y ampliación de pistas; en Neuquén, construcción de pistas; en Trelew, ampliación; en Carmen de Patagones, construcción y ampliación de pistas; en Puerto Deseado, construcción de nuevo aeropuerto, etcétera.

Las citas las formulo, señor presidente, con el objeto de hacer notar a los señores senadores que al pedir la aprobación de este proyecto de ley lo hago no tan sólo por las argumentaciones ya expresadas sino, también, porque así estaremos dentro de una política franca de aeronavegación en el país.

Chilecito, centro industrial por excelencia dentro de nuestra provincia, es una ciudad donde se entremezcla la industria minera con la agrícola, que tiene gran importancia y desarrollo. Pero el intercambio comercial se encuentra obstaculizado con el resto de La Rioja y con las provincias vecinas debido a la ubicación geográfica del valle de Famatina. Se hace sumamente costosa la movilización a través de sus enormes sierras, como lo son las moles del Famatina y del Velazco; el transporte pesado debe efectuarse por medio de camiones que recorren cuevas peligrosas por la carga que llevan los acoplados.

Todos estos factores serán solucionados, en parte, con la construcción del aeropuerto de Chilecito. En cuanto a las pistas auxiliares, ellas son de gran utilidad para los casos de emergencia, resultan de poco costo y permiten el enlace con los aeródromos del resto del país.

Además, señor presidente, quiero hacer notar que si bien la cifra de 27 millones de pesos que se consigna en el proyecto de ley sirve para la construcción de nuestros aeródromos y pistas, no es suficiente para la terminación de las instalaciones necesarias para los controles de vuelo. El saldo, como bien lo dice el proyecto, sería cubierto por el Ministerio de Aeronáutica.

Ante este pasado y conocedores del presente de la provincia, creo, señor presidente, que en un porvenir no lejano nos encontraremos a una distancia algo menor en nuestros problemas económicos con relación al resto de las provincias hermanas.

En base a lo expuesto, pido a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Guido). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general, el despacho de comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Guido). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se hará la comunicación correspondiente a la Honorable Cámara de Diputados.

19

YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO. — MINA FARALLON NEGRO

Sr. Presidente (Guido). — Corresponde tratar el orden del día 111.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Sbarra). — (*Leyendo*):

(Orden del día número 111)

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Industria ha considerado el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se crea el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) —Mina Farallón Negro—; y, por las razones que dará su miembro informante, os aconseja su aprobación, modificando el inciso g) del artículo 10, y el primer apartado del artículo 20, en la siguiente forma:

Artículo 10. — inciso g) Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, en el presupuesto, sin alterar su monto y dando cuenta de ello al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros.

Artículo 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa, por haberse declarado la caducidad de la concesión o por alguna otra razón de similar importancia que demuestre fehacientemente la imposibilidad de continuar con el giro de aquélla.

En tales casos, el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición, los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación, que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá

al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro Nacional.

El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Conforme a lo establecido por el artículo 90 del reglamento, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 23 de septiembre de 1958.

Augusto G. Bayol. — Franklin A. Sánchez. — Martín Vilchez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley, y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.

Art. 2º — El domicilio de YMAD estará en la provincia de Catamarca, con la ubicación precisa dentro de la jurisdicción provincial que determine el directorio de la empresa, sin perjuicio de las delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán u otros lugares del país.

Art. 3º — YMAD tiene la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado para la realización de su objeto y en consecuencia podrá adquirir toda clase de derechos, inclusive derechos mineros; contraer toda clase de obligaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos reglados por los códigos de la Nación y leyes generales y especiales pertinentes.

Art. 4º — La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 kilómetros cuadrados), definida por un rectángulo cuyo lado mayor de veintitrés kilómetros cuatrocientos

metros (23,4 kilómetros), tiene su punto de partida en el paralelo 27º 20' y el meridiano 66º 48' 30" y con dirección Sur 62º. Este pasa por el puesto de Ovejera; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce kilómetros setecientos metros (14,7 kilómetros) que pasa por los puestos de Vizcachas y Escaleras; desde el extremo de esta línea, una perpendicular que pasa por el puesto de Aguada, y desde el extremo de esta última línea, otra perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida.

Art. 5º — YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.

Art. 6º — YMAD estará dirigido y administrado por un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán, y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 99, o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario y la resolución del directorio a su respecto será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Los vocales del directorio se renovarán por mitades cada dos años, debiéndose determinar por sorteo el vocal designado por la provincia de Catamarca y el designado por la Universidad Nacional de Tucumán, que deben cesar en sus funciones en la primera renovación.

El directorio designará cada año un vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de impedimento o ausencia.

Cuando se produzca una vacante durante el período para el cual haya sido designado un miembro del directorio, el nombramiento del reemplazante se hará sólo por el tiempo que falte para cumplir el período. Los miembros del directorio que hayan terminado su período continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designe su reemplazante.

Las resoluciones del directorio se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. El quórum para deliberar válidamente será de tres miembros. En ningún caso los miembros del directorio podrán negarse a emitir su voto, sin perjui-

cio de las reservas que estimasen del caso formular y de las excusaciones que correspondan por ley, de las que se dejará constancia en el libro de actas.

Art. 7º — Si se denunciara a tres o más de los miembros del directorio como incurso en algunas de las causales previstas en el artículo 6º, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio. Previa la confirmación de la denuncia, observando todas las garantías de ley, el interventor declarará la caducidad en sus funciones de los afectados, pero en ningún caso podrá asumir él mismo tales funciones. El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Art. 8º — Para ser miembro del directorio se requiere ser ciudadano argentino mayor de treinta años de edad, o, en caso de ser naturalizado, con quince años de ciudadanía en ejercicio.

Art. 9º — No podrán ser miembros del directorio:

- a) Los que ejerzan cualquiera otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de las de la docencia;
- b) Los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil y los que hayan sido condenados por delitos comunes;
- c) Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la explotación, exploración, industria y comercio privado del oro, la plata y el manganeso, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.

Los miembros del directorio que con posterioridad a su nombramiento cayeren en algunos de estos impedimentos, cesarán en sus funciones y serán reemplazados de inmediato.

Art. 10. — El directorio tendrá todas las facultades y atribuciones requeridas para el cumplimiento integral de la función que se le confiere, correspondiéndole en especial:

- a) Realizar en los términos del artículo 1º el estudio, exploración, cateo, explotación y comercialización de todos los minerales existentes en la zona delimitada por el artículo 4º, a cuyo fin podrá ejecutar y ejercer los actos y funciones establecidos en el artículo 3º;
- b) Conferir poderes generales y especiales y revocarlos;
- c) Disponer la organización interna de la empresa y reglamentar y aprobar las

normas complementarias del régimen de contratación de obras y servicios, adquisiciones, etcétera;

- d) Dictar el reglamento interno de la empresa, con sujeción a las disposiciones de esta ley y del estatuto orgánico que, a propuesta del directorio, apruebe el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, regirá el estatuto orgánico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en todo cuanto resulte aplicable;
- e) Nombrar, contratar, promover, suspender, aceptar renunciaciones y remover al personal superior, administrativo y técnico. En cuanto al personal inferior, esas mismas facultades competirán al superintendente o gerente general de la empresa;
- f) Preparar anualmente el plan de acción a cumplir durante el o los ejercicios económicos siguientes, acompañando una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar por la empresa y un presupuesto de explotación que contemple en forma integral y en grandes rubros, los recursos y erogaciones que han de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, así como la estimación de los probables resultados a obtener. El plan de acción y el presupuesto de explotación deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional, dando cuenta de ello al Congreso. Si por cualquier circunstancia no lo fuere antes de iniciarse el ejercicio económico a que se refiere, continuará aplicándose el presupuesto anterior;
- g) Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, de los créditos parciales que constituyen los rubros principales, sin alterar el monto de éstos, dando cuenta al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros;
- h) Elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos y al finalizar cada ejercicio un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas;
- i) Elevar anualmente a los Poderes Ejecutivos de la Nación y de la provincia de Catamarca y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, una memoria descriptiva y comparativa de la gestión realizada en relación con lo previsto en el plan de acción;

- j) Fijar a propuesta del presidente la retribución extraordinaria que deba darse a los funcionarios, empleados y obreros en razón de su eficacia en el trabajo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte y dentro de un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas;
- k) Crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos;
- l) Crear en la provincia de Catamarca un Instituto de Investigaciones mineras y una Escuela de Minería a fin de promover investigaciones mineras y metalúrgicas y la formación de personal especializado.

Art. 11. — Corresponde al presidente del directorio:

- a) Tener la representación legal y administrativa de la empresa;
- b) Girar sobre los fondos de la empresa, debiendo su firma ser acompañada por la del contador y tesorero, o por la del funcionario autorizado para ello por el directorio;
- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio y cumplir y hacer cumplir sus resoluciones;
- d) Resolver por sí todos aquellos asuntos para los cuales esté autorizado por el reglamento interno que dicte el directorio, como así también aquellos otros que están reservados a este último cuando razones de extrema urgencia así lo exijan, con cargo de dar cuenta a dicho cuerpo, a cuyo efecto deberá citarlo de inmediato.

Art. 12. — La provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán podrán designar uno o más delegados cuyas atribuciones serán las siguientes:

- a) Examinar los libros y documentos de la empresa y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie;
- b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere el inciso f) del artículo 10.

Estos delegados serán retribuidos por la parte a la que representen y ejercerán sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la explotación. Las autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de los delegados, las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 13. — En sus relaciones con terceros YMAD, se regirá por el derecho privado. A los

efectos de este artículo se considerarán terceros todas las personas de existencia visible o jurídica, constituidas éstas por capitales privados o mixtos, y las dependencias o empresas del Estado nacional, provincial o municipal. En sus relaciones con la provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentaciones vigentes. En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional, actuará por intermedio de la Secretaría de Industria y Minería y del Ministerio de Economía, siéndole, en ese aspecto, aplicables las normas de derecho público.

Art. 14. — YMAD efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, mediante la licitación pública, licitación privada, concurso privado de precios y contratación directa, según las normas que se establezcan en su reglamento interno. Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 15. — Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos). Además, le otorgará en préstamo, sin interés, reembolsable en diez cuotas anuales iguales a contar del cuarto año de su constitución hasta la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos).

Art. 16. — Independientemente de los recursos ordinarios provenientes de sus actividades, YMAD podrá hacer uso del crédito, hasta el monto que lo autorice su presupuesto, para completar o facilitar la financiación de las mismas, a cuyo efecto podrá:

- a) Solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales, mixtas o privadas, y recurrir a cualquiera otra forma de crédito o financiación;
- b) Recibir contribuciones del Estado nacional reintegrables o no. En este último caso el importe de la contribución importará aumento del capital de la empresa.

Art. 17. — A los efectos de la fiscalización del manejo de los fondos y ejecución del presupuesto, el Tribunal de Cuentas de la Nación podrá destacar periódicamente uno o más auditores al solo efecto de:

- a) Verificar la correcta aplicación del Plan de Cuentas, la veracidad, exactitud y simultaneidad de las registraciones y la oportuna presentación de los estados periódicos;
- b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan y si encuadran den-

tro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados. Los auditores propiciarán, ante el Tribunal de Cuentas y a efectos de que el mismo resuelva de acuerdo con las atribuciones que le acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Art. 18. — Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

- a) El sesenta por ciento (60 %) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la Ciudad Universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
- b) El cuarenta por ciento (40 %) restante será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
- c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %) se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del país.

Art. 19. — YMAD deberá:

- a) Instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio cuya capacidad mínima será de doscientas cincuenta toneladas por día, en un plazo máximo de siete (7) años a partir de su constitución, y realizar el desarrollo de una exploración adecuada;
- b) Mantener una producción relacionada con la capacidad de la planta.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería.

Art. 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa, sea por haberse declarado la caducidad de la concesión, o por no estar integrada la mayoría del directorio a los dos meses de caducados los mandatos de los miembros respectivos, o por alguna otra razón de similar importancia que demuestre fehacientemente la imposibilidad de continuar con el giro de aquélla. En tales casos, el Poder

Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación, que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa, que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro Nacional.

El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Art. 21. — Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería.

Art. 22. — En cualquier caso de caducidad de la concesión, los yacimientos quedarán reservados para el Estado por el término de un año.

Art. 23. — En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado.

Art. 24. — Derógase el decreto ley 270/58.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Emilio Donato del Carril. — Ricardo Lumi. — Alberto V. Tedín.

ANTECEDENTES

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1958.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a la decisión del Congreso Nacional el adjunto proyecto de ley, mediante el cual se persigue la creación del ente autárquico que ha de emprender la explotación integral de los yacimientos de oro, plata y manganeso situados en Farallón Negro, o Agua de Dionisio, lugar de la provincia de Catamarca.

Dicho proyecto subroga al decreto ley 270/58, cuya modificación se acordó por la cláusula 7ª de la convención y declaración suscrita el 7 de junio último por el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, su excelencia el señor gobernador de Catamarca, el señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales.

De acuerdo con la cláusula 8ª de dicho documento, aprobado por ley 1.695 de la Honorable Legislatura de Catamarca, el proyecto adjunto fue redactado íntegramente por representantes de la provincia de Catamarca, que fueron los doctores don Ricardo G. A. Herrera y don Ramón Bonaterra, y de la Universidad Nacional de Tucumán, los doctores don Cele-

donio Gutiérrez y don Horace W. Bliss, todos ellos especialmente designados al efecto, habiéndose introducido algunas variantes que se estima no alteran lo substancial del instrumento.

El carácter público y notorio alcanzado por todo lo relativo a las minas de Agua de Dionisio, exigen al Poder Ejecutivo de relatar los antecedentes de la cuestión, suficientemente conocidos, y de fundar la necesidad y urgencia en constituir el ente explotador.

No obstante ello, cumplo en señalar a vuestra honorabilidad una circunstancia que torna angustiosa la necesidad y urgencia invocadas: el próximo vencimiento de la reserva de la zona, establecido para el día 31 de diciembre próximo por el decreto ley 17.346/57. Si antes de esa fecha no se ha promulgado y publicado la ley propiciada, en virtud de cuyo artículo 23 deberá considerarse prorrogado el plazo de la reserva, los yacimientos podrán desde entonces ser válidamente solicitados en concesión por cualquier particular, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Minería. El Poder Ejecutivo confía en que ello no ha de ocurrir, fundándose en la responsabilidad evidenciada por los señores miembros del Congreso Nacional y en la importancia de orden económico, cultural, social y político que el asunto reviste.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO FRONDIZI.

Emilio Donato del Carril. — Ricardo Lumí. — Alberto V. Tedín.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración.

Sr. Bayol. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Bayol. — El mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que motiva el despacho que estamos considerando plantea un problema de fundamental importancia, conocido y debatido ya públicamente y que ahora reclama una solución perentoria.

Dicho proyecto de ley, como muy bien lo expresa el Poder Ejecutivo, subroga el decreto ley 270/58, por el que se facultó a la Universidad Nacional de Tucumán para explorar y explotar las minas de Catamarca y cuya modificación fue dispuesta por la cláusula 7ª de la convención y declaración suscrita el 7 de junio último por el señor vicepresidente de la Nación, el señor gobernador de Catamarca y el señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, señores legisladores, funcionarios nacionales y provinciales.

El mismo documento, aprobado por la ley 1.695 de la Legislatura de Catamarca, disponía en su cláusula 8ª la redacción de este proyecto, cuya forma se debe a los representantes de esta última provincia y de la Universidad Nacional de Tucumán designados a tal efecto, y cuya estructura ha sido respetada salvo ligeras modificaciones.

Una razón de urgencia señala la necesidad de abocarse de inmediato al estudio y sanción de

esta iniciativa, y es la siguiente: el 31 de diciembre próximo vence el plazo fijado por el decreto ley 17.356/57, que declaró zona de reserva la del yacimiento minero del Farallón Negro o Agua de Dionisio, distrito de Hualfin, de la provincia de Catamarca. Si antes de esa fecha no se ha convertido en ley esta iniciativa, por cuyo artículo 23 se prorroga dicho plazo, los yacimientos podrán ser solicitados legalmente en concesión por cualquier particular. La enunciación de la consecuencia que dejo señalada define el carácter perentorio a que he aludido anteriormente.

No he de distraer ociosamente el tiempo de la Cámara, tan comprometido en estos momentos en asuntos de interés general, en este final de período. Renunciaré a consideraciones adjetivas respecto del problema en sí. Las consecuencias de carácter político, en el alto sentido de la expresión, estoy seguro que han de ser apreciadas perfectamente por los señores senadores, de modo que, consecuente con el propósito ya enunciado, he de entrar en la consideración del aspecto técnico del proyecto para luego estudiarlo en detalle, subrayando la importancia de algunas de las cláusulas de su articulado.

Sobre el yacimiento de Farallón Negro, de la provincia de Catamarca, se ha discutido mucho. Desde los primeros cuadernos de mineralogía y geología de Abel Peyrano, escritos en 1938, ampliados en 1944 y 1945, hasta el último informe técnico de W. E. Warnke, las publicaciones de González Bonorinó, Walter C. Stoll, Angelelli, González Stegman, Tezón y de la Iglesia, Ruiz Bates, Tabacchi, Giordana, etcétera, todos se han ocupado de este fabuloso accidente geológico, con miras a su explotación. Pero, como es lógico suponer, toda esta bibliografía supone un previo conocimiento, y el conocer acucia el interés por saber todo lo que se tiene ante sí, exploraciones y explotaciones, minúsculas algunas, mayores otras, hace a la historia de esta importante riqueza que la piedra milenaria esconde en su seno.

Quien primero estudió la zona fue el doctor Abel Peyrano, quien ya en 1941 hizo inscribir en el Registro de Minas de Catamarca los primeros pedimentos de exploración y cateo en la zona de Agua de Dionisio. Más tarde, Peyrano interesa a la Universidad de Tucumán, la que en 1949/50 construye un campamento central en Agua Tapada, con taller, enfermería, tanques, etcétera, una planta experimental de concentración y un laboratorio químico; para esa fecha se ejecutaron los primeros piques, hasta 150 metros, en Farallón Negro.

En 1951 se disponen las primeras medidas de carácter oficial: el Poder Ejecutivo, con fecha 31 de enero, dicta el decreto 1.934, que declara zona de reserva una superficie de 1.428 kilómetros cuadrados en Agua de Dionisio, y en diciembre de ese mismo año, la Dirección Nacional

de Minería conviene con la Universidad Nacional de Tucumán la ejecución de trabajos mineros y estudios técnicos. Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional, por decreto 8.635 de mayo de 1953, amplía el anterior, reajustándose la superficie de reserva a 343 kilómetros cuadrados, y la Dirección de Fabricaciones Militares inicia la ejecución de trabajos exploratorios; se ejecutan 1.200 metros de labores subterráneas diversas, y se inicia la construcción de un pique maestro y otros sondajes. En 1956 se completa la planta experimental existente, con intervención de la Universidad de Cuyo, y se realizan pruebas de concentración de oro y manganeso.

El tiempo no transcurre en vano; a medida que se van visualizando los resultados de los trabajos que se realizan, el interés, elemento que enturbia las intenciones y los propósitos, aun los mejor concebidos, dificulta la concreción un *status* que permita la explotación de esta riqueza con verdadero beneficio para el país.

Pero la cordura priva finalmente, cuando a los grandes diferendos surgidos entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán se anteponen la pasión del bien colectivo y los sentimientos más puros de patria, libertad y federalismo. Las autoridades nacionales surgidas del comicio histórico del 23 de febrero se abocan a la resolución de este importante pleito y, apelando a la buena voluntad de las partes, con deposición de intereses mezquinos, el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, doctor Alejandro Gómez, obtiene la conciliación de las pretensiones esgrimidas por los representantes de la provincia de Catamarca y de los de la Universidad Nacional de Tucumán, y logra la concertación de un acuerdo que es la base sobre la cual se crea el organismo denominado Yacimiento Minero Agua de Dionisio.

Antes de entrar en otras consideraciones, quisiera dar una breve explicación, a manera de un estudio mineroeconómico, de este importante yacimiento, siguiendo para ello el informe técnico del ingeniero Alberto Monchablón, designado por el Poder Ejecutivo nacional como asesor para el estudio de las posibilidades de la empresa y para la estructuración del organismo que la dirigirá.

En el distrito de Hualfín, donde se halla ubicado este yacimiento, existen variadas manifestaciones minerales, lo que da a la zona especial característica geológica. La distancia de la mina a la estación Andalgalá, del Ferrocarril General Belgrano, es del orden de los 188 kilómetros para las rutas actuales, que en general no son apropiadas para una explotación del tipo que estamos considerando, pues en su mayoría el camino no es apto para transportes pesados. Existe, sin embargo, la posibilidad de construir un camino adecuado directamente de la mina hasta la estación Andalgalá, que si bien exigiría una fuerte

inversión, reduciría la distancia a menos de la mitad del actual.

La conformación del terreno es de extrema aspereza, con abruptos relieves y quebradas profundas. Su altitud oscila en las distintas vetas entre los 2.200 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar. El clima es sano, con inviernos moderadamente rigurosos; difícilmente nieva y, en general, permite realizar cualquier clase de tareas durante todo el año.

El agua es accesible, pues dista de la mina sólo 25 kilómetros del río Nacimiento, que tiene caudal permanente, lo que descarta toda obra de acumulación; por cuyo motivo, a los fines del suministro de este elemento, con obras de tomas sencillas será suficiente.

Maderas para entibación se hallan en bastante cantidad en Andalgalá y Santa María. Las localidades de Hualfín, Belén y Andalgalá, con su discreto comercio, pueden atender a las necesidades que requiera la población minera. En las localidades de Santa María y Andalgalá existen adecuados servicios médicos, farmacéuticos, etcétera, de manera que el personal ocupado en las tareas mineras, si no cuenta con esos servicios para su uso exclusivo, puede ser atendido sin ninguna dificultad con los medios sanitarios que existen en la zona.

Hualfín, Belén y Andalgalá tienen líneas telegráficas, de suerte que este tipo de comunicaciones se hace accesible.

La mano de obra existente en la zona posee alguna experiencia minera, y esto, unido a la característica de sobriedad de costumbres del nativo, asegura a la explotación una fuente de mano de obra de condiciones muy excelentes.

Hasta la fecha se han realizado distintos trabajos de exploración y explotación y, además, se han construido diversas instalaciones para el laboreo del material extraído. Así, el pique uno, ejecutado por la Universidad de Tucumán hasta una profundidad de 150 metros, Fabricaciones Militares y Dirección de Minería lo profundizaron a 180 metros y se recorrieron 4 niveles con un total de 929 metros de galería y 273 metros de estacadas; el pique dos, también ejecutado por la Universidad de Tucumán, mide 24 metros y tiene castillete de extracción. El pique maestro, proyectado y financiado por la Dirección de Minería, tiene dos compartimientos con amplia luz libre en cada uno y una profundidad de treinta y cinco metros debidamente enmaderados, y dispone también de castillete de extracción.

Existen otras perforaciones ejecutadas por la Dirección Nacional de Minería y por Fabricaciones Militares, que han permitido extraer un abundante muestreo con alta concentración de minerales.

La planta experimental que la Universidad Nacional de Tucumán construyó en Agua Tápada tiene una capacidad de tratamiento de tres

toneladas y media en 24 horas, y en sus ensayos ha obtenido la recuperación de oro por el método de cianuración.

Existen 3 campamentos en la zona: uno en Agua Tapada, otro en las inmediaciones del pique uno, y el de la Dirección de Minería, a tres kilómetros al oeste del mismo, en Farallón Negro. Todos en perfectas condiciones de habitabilidad y que por el material empleado —propio de la zona—, puede ser prototipo de los que sea necesario construir en el futuro.

La producción de manganeso proveniente de Farallón Negro, según se calcula para la posible extracción que se haga, será íntegramente absorbida por la planta siderúrgica de San Nicolás. Esto asegura el mercado.

En efecto, San Nicolás, en su primera etapa, empleará alrededor de 12.000 toneladas finas anuales, de las cuales Farallón Negro le proveerá del 65 al 70 %, es decir, alrededor de las 7.500 toneladas finas de manganeso. Esto significa que no habrá problemas de competencia, pues queda margen suficiente para la producción de otras minas. Además, en lo que a época inicial de explotación se refiere, debe consignarse que en el año 1961, de llevarse a cabo ambas explotaciones, Farallón Negro producirá manganeso tanto como arrabio San Nicolás.

Respecto al precio del manganeso, conforme a los cálculos de costo de explotación, separación y manipuleo del mineral, flete, etcétera, el mineral podrá entregarse en San Nicolás a un valor similar al cotizado sobre vapor en el mismo punto, con la consiguiente economía de divisas.

También se han hecho estudios relativos al valor de los minerales a extraer. Según dichos estudios, se llega a un producto aureomanganesífero con las siguientes leyes: 10 gramos de oro por tonelada y un 11 % de manganeso, o sea 110 kilogramos. Calculando precios normales de 50 pesos el gramo de oro y 5,30 pesos el kilo de manganeso, se llega a una recuperación de 1.083 pesos por tonelada extraída. Si reconocemos una capacidad de producción de 75.000 toneladas brutas, llegamos a un valor de producción anual del orden de los 81.225.000 pesos. Ahora bien; frente a estos valores en pesos de la producción calculemos las inversiones que habrán de hacerse para lograrla, y estimemos en 700.000 dólares el valor de los compresores, motocompresores, guinches, equipo básico de concentración, martillos neumáticos, etcétera, es decir, bienes que no pueden adquirirse en el país. Además, instalaciones, elementos de fuerza motriz, talleres, caminos, campamentos, vehículos, instalaciones de agua y bombeo, capital evolutivo para tres meses, etcétera, por un total de 75 millones de pesos. Vemos así que económicamente es un rendimiento teórico, es verdad, pero previsiblemente tan ajustado a la

realidad, que no deja lugar a dudas respecto de los resultados de esa explotación.

Las conclusiones del estudio a que me vengo refiriendo no hacen más que ratificar los conceptos que he expresado. Ello sugiere la conveniencia de iniciar cuanto antes un plan exploratorio aconsejado por la Dirección General de Minería, plan que consta de dos etapas: en la primera se profundiza el pique maestro y abre un nuevo pique, el número 3, en veta. Se procede a la ejecución de una chimenea entre los niveles 90 y 143 para facilitar la ventilación de la mina, y luego, desde el pique maestro, avanzar hacia el Este para conectar con los trabajos del pique uno.

La segunda etapa consiste en el avance simultáneo, con la ayuda de ventilación mecánica, conectando entre sí los piques 1, pique maestro y pique 3.

Todos estos trabajos se podrán realizar con los elementos y el personal existentes, y se han presupuesto en cerca de 10 millones y medio de pesos.

Cada etapa puede realizarse en un lapso aproximado de nueve meses; pero, por la información y evidencia obtenidas a la terminación de la primera e iniciación de la segunda, es factible que puedan lograrse decisiones definitivas antes de terminarse la segunda etapa.

Y terminan las recomendaciones con este concepto que no resisto la tentación de transcribir textualmente, por su claridad y precisión: «Se considera que la ejecución rápida y eficiente de las recomendaciones indicadas permitirá fundamentar una industria minera bien concebida, que podría entrar en funcionamiento casi simultáneamente con su mercado comprador, es decir, con la siderurgia nacional de San Nicolás.»

Entremos ahora al examen del articulado del proyecto, que he de efectuar no en su integridad sino en sus aspectos más fundamentales.

Por el artículo 1º se determina en forma taxativa el objeto del ente que se crea. Dice así: «Créase Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley, y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquier otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.»

La sede del YMAD se fija en la provincia de Catamarca, y se autoriza el funcionamiento de delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán y otros lugares del país.

¿Cuál será la capacidad jurídica de este organismo, señor presidente? Responde a este interrogante el artículo 3º, que le otorga la misma

de las personas jurídicas de derecho privado para la realización de sus fines; vale decir, que podrá adquirir toda clase de derechos, inclusive derechos mineros; contraer obligaciones y ejecutar y celebrar actos jurídicos y contratos regidos por las leyes de fondo y las generales y especiales de la Nación.

Por el artículo 4º se incorpora al estatuto una disposición que quiero subrayar porque importa una excepción a la ley de fondo en esta materia. La misma autoriza a la provincia de Catamarca a conceder a YMAD el yacimiento minero de Agua de Dionisio, de una superficie de 343 kilómetros cuadrados 98 hectáreas, con prescindencia de las prescripciones del Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias. Esta cláusula podría parecer un poco excesiva a primera vista; pero cualquier escrúpulo que pudiera abrigarse en ese sentido se desvanecerá frente a la garantía que se consigna inmediatamente: YMAD no podrá transferir, bajo ningún pretexto, los derechos que por esta ley se le otorgan ni otro alguno que pueda derivar de la concesión a que se refiere el artículo 4º, ya fuese en forma total o parcial, a personas o empresas privadas nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas nacionales o provinciales. Como se ve, todos los recaudos están tomados en defensa de ese patrimonio, por tantos conceptos inalienable. Hago votos, señor presidente, porque los contratos que se suscriban con respecto a nuestro petróleo y a nuestra energía eléctrica guarden los mismos recaudos en defensa de nuestro patrimonio y de nuestra soberanía nacional. (Aplausos.)

No menor que esta que dejo señalada es la garantía que para ambas provincias y para la Nación significa la forma de integración del directorio, que lo será por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca y dos por la Universidad Nacional de Tucumán, y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º, por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario, y la resolución del directorio a su respecto será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Para el caso de que sea llegada la necesidad de intervenir el ente, por falencia de la mayoría de los miembros del directorio, la ley dispone que el Poder Ejecutivo de la Nación podrá intervenirlos. Si se comprobare la veracidad de

los cargos formulados, podrá declarar la caducidad de sus mandatos. Aquí también la ley se muestra previsoramente y sabia, porque este hecho no autoriza al poder administrador para subrogarse en las funciones de los directores sancionados y, como consecuencia, en las del directorio. De allí que las funciones de la intervención sean concretas y de carácter precario. En tal caso, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, de acuerdo con lo que prescribe este artículo y el apartado del artículo 6º, procederán de inmediato a reemplazar a los cesantes. De esta manera, el órgano director de YMAD mantendrá en forma permanente la estructura legal y se conjura por anticipado el peligro de cualquier preponderancia del poder central, lesiva del equilibrio que la ley quiere garantizar a ambas partes.

Dada la naturaleza de las funciones que ha de cumplir la entidad que se crea, era menester rodear a los integrantes del directorio de las máximas garantías que, desde el punto de vista ético, resultan imprescindibles para tales casos. De allí la severidad de las exigencias que el artículo 9º determina para sus miembros. Las funciones que ellos habrán de cumplir tienen, sin duda alguna, carácter técnico, pero tal tecnicismo debe estar fuertemente respaldado por la ecuación moral de cada uno de ellos si se quiere que no sólo sean sino que parezcan también insospechables.

Por el artículo 10 se determinan las facultades y atribuciones del directorio. No he de referirme en detalle a cada una de ellas, ya que son las que comúnmente leyes de este tipo acuerdan a los organismos directivos; por otra parte, su lectura es suficientemente ilustrativa al respecto.

Sólo quiero señalar y comentar especialmente la que consigna el inciso g), porque en ella la comisión ha creído oportuno introducir una modificación tendiente a dotar al organismo de una flexibilidad en la ejecución de su presupuesto, que ha de facilitarle en forma decisiva el cumplimiento de sus fines. Dicho inciso, en su forma originaria, establece que es facultad del directorio «introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios de los créditos parciales que constituyen los rubros principales, sin alterar el monto de éstos, dando cuenta al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro de sueldos y jornales requerirán el voto afirmativo de la totalidad de los miembros».

Se propone en su reemplazo lo siguiente: «Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios en el presupuesto, sin alterar su monto y dando cuenta de

ello al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro de sueldos y jornales requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros.»

Merecen especial mención los incisos f) e i), pues ellos determinan la obligación del directorio de formular sus planes, presupuestos, etcétera, y hacerlos conocer por las partes en tiempo oportuno, elevando una memoria descriptiva y comparativa de la gestión realizada en relación con lo previsto en su plan de acción. Disposición feliz, por cierto, señor presidente, porque ha de permitir que la acción de YMAD sea estudiada y analizada por las entidades más directamente vinculadas al problema, tendiendo así al perfeccionamiento de sus planes.

Destacaré, asimismo, por la proyección que en el futuro habrá de tener, la disposición del inciso l), por la que se creará en la provincia un Instituto de Investigaciones Mineras y una Escuela de Minería con el objeto de lograr la promoción de las investigaciones metalúrgicas y mineras, así como la formación de personal especializado.

Por el artículo 12, se garantiza a Catamarca y a la Universidad de Tucumán, el control directo de la marcha de la empresa y la fiscalización de la ejecución del plan a que se refiere el inciso f) del artículo 10, ya comentado.

El artículo 13 establece claramente a qué normas jurídicas ha de ajustarse la empresa en sus relaciones con terceros y con la provincia de Catamarca, así como las de índole administrativa con respecto al Poder Ejecutivo nacional.

Paralelamente a la capacidad jurídica que le acuerda el artículo 39, se otorga a la empresa autarquía financiera, a través de los artículos 15 y 16. Es evidente la necesidad de esta norma para el desarrollo integral de YMAD, que de otro modo se vería trabada en su acción. Es claro, señor presidente, que tal libertad no importa, de modo alguno, el otorgamiento de una facultad discrecional que pudiera comprometer el giro de la empresa. Por el contrario, el artículo 17 asegura a los efectos del manejo de fondos y ejecución del presupuesto, la intervención del tribunal de cuentas de la Nación, que podrá destacar periódicamente sus auditores con fines de verificación y análisis de la ejecución del plan de cuentas y de los actos acordados por el directorio.

Estas facultades son amplias y representan, como he dicho, una garantía eficiente y digna de ser destacada.

No está ausente de la ley el sentido de la integración federalista que preside e inspira la acción de los poderes públicos, surgidos de los comicios del 23 de febrero último. El artículo 18 establece la forma en que han de ser distribuidas las utilidades de la empresa. Estas

utilidades deberán destinarse no sólo a vigorizar las finanzas de la provincia de Catamarca, en cuyas entrañas duerme aún la riqueza que ha de aflorar, sino también las de la Universidad de Tucumán, que compartirá, por decisión expresa de la ley, con todas sus hermanas de la República, los beneficios que arroje la explotación.

Conforme a los términos del artículo 281, capítulo II, del Despueblo, título IX, de las Condiciones de la Concesión, del Código de Minería, que establece que los 135 días durante los cuales puede el concesionario hacer cesar o reducir los trabajos, correrán juntamente con los términos de suspensión por cualquiera de las causas señaladas en los artículos precedentes, YMAD deberá garantizar un permanente estado de producción de acuerdo con los fines para los cuales se crea. Es decir, que será tratada a los efectos del Código de Minería, como cualquier otro ente de carácter privado, según lo dispone el artículo 19 del proyecto.

La comisión ha creído conveniente introducir una modificación al artículo 20. Según el mismo, YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo podrá resolver la disolución y la liquidación de la empresa, sea por haberse declarado la caducidad de la concesión, o por estar integrada la mayoría del directorio a los dos meses de caducados los mandatos de los miembros respectivos, o por alguna otra razón de similar importancia que demuestre fehacientemente la imposibilidad de continuar con el giro de aquélla.

La comisión propone suprimir de dicho artículo la causal que se refiere a la integración de la mayoría del directorio. La razón resulta fácil de comprender, señor presidente. De subsistir esta cláusula podría presentarse el siguiente supuesto: bastará que el Poder Ejecutivo de la Nación acuerde con alguna de las partes no proceder a dicha integración, para que, como consecuencia, pueda procederse a la disolución de la empresa. Planteado así el problema surge con toda claridad la solución, ya que de ningún modo puede estar en la intención y el espíritu de la ley la operación de tal consecuencia. De allí que proponga eliminar del artículo 20 lo siguiente: «...o por no estar integrada la mayoría del directorio a los dos meses de caducados los mandatos de los miembros respectivos».

Consecuente con lo que he expresado al referirme al artículo 19, respecto del pago del canon minero y demás contribuciones que determina el Código de Minería, YMAD no recibirá trato preferencial alguno; sólo se operarán las exenciones impositivas comunes en los regímenes orgánicos de entidades similares, tales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Señor presidente: presento excusas a los honorables colegas por la inusitada latitud de este informe. Estoy persuadido de que sin esfuerzo alguno han de encontrar la razón de la misma. Era necesario fijar de manera siquiera superficial los alcances técnicos y la proyección económica que la sanción de esta ley puede significar para el interior del país, con un profundo sentido federalista que es nuestro propósito robustecer e incorporar definitivamente a la legislación. Era forzoso entrar al manejo de tecnicismos y de cifras para determinar concretamente los alcances de la iniciativa; ha sido conductor inteligente de estas tareas el informe del ingeniero Monchablón, que he aprovechado en la forma más breve que me ha sido posible en la confección de mi propio informe.

El instrumento legal de que será dotado el país con esta sanción ha de producir previsiblemente fecundas consecuencias. Las cláusulas del proyecto representan una garantía de equilibrio en los derechos y de eficiencia en la acción de YMAD. Podrán ser sus disposiciones perfectibles pero lo que no admite dudas, es que su articulado concreta la arquitectura de una empresa que realizará, al propio tiempo que sus fines esenciales, la armonía de intereses en apariencia contrapuestos y que en el fondo concurren a la misma alta y noble finalidad; reactivar la riqueza material y espiritual de la Nación.

Si se lograra realizar siquiera en parte los fines señalados, la ley estará ampliamente justificada. El país se ha puesto en marcha, señor presidente. Lo impulsa la voluntad unánime del pueblo que, solidario con la común empresa de realizar la integración federalista largamente soñada, entrega diariamente su esfuerzo y hasta su pasión, noble pasión, señores senadores, porque no la mueve el interés bastardo sino un ideal cernido a través de la sensibilidad de cada uno, con el margen natural de posibilidades para el error y la equivocación.

Creaciones como YMAD concurren a la promoción integral de la República. Celebremos su advenimiento como la realización de una etapa más del programa que en ese sentido nos hemos trazado. Nada más. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Gallo. — Señor presidente, señores senadores: Agua de Dionisio es una región montañosa que está ubicada al este del valle de Hualfín, departamento de Belén, y forma el rincón limítrofe del sudeste del departamento de Santa María y el noroeste de Andalgalá. Está limitada al Norte, con el Bordo, que la separa de Santa María, al Este con el cerro de la Alumbraera que la limita con Andalgalá, al Sur con las cumbres de San Buenaventura y al Oeste con el río de Hualfín.

En esta magnífica región, antes del descubrimiento de América, se explotaban numerosos yacimientos de oro y plata. Estas riquezas, que las consideraron cual otro El Dorado, motivaron la ocupación del lugar por los indios del Cuzco, quienes en un irrefrenable ambicionar trabajaron sus minas e industrializaron los tan preciosos metales.

Cuando el conquistador español, todavía con latentes resabios del sentir moruno y el romantismo de una raza milenaria, llegó como un caballero de todas las cruzadas a las vírgenes costas de la América, misteriosa y legendaria, clavó la pica de su imperio y enarboló la cruz de su credo, y, señor de sus hazañas, fijó en el horizonte de sus esperanzas los límites de sus posesiones, las famosas riquezas que encontró en las regiones del Cuzco y en las ciudades maravillosas de los incas, cautivaron su alma y el tintineo del oro en su brillar sugestivo, le hizo levantar el pendón de su realeza sobre el tope de todos los mástiles del mundo.

El afán de conquista del ibérico triunfador pasó los límites de los derechos ajenos que se usurpan y llegó al dominio psicológico sobre el culto mitológico del indio, obligándole a inhumar su más preciado secreto. Fue así que el espíritu bravío de don Diego de Almagro penetró hasta la región de los valles calchaquiles, donde se encontraba la actual Agua de Dionisio.

Si fuerte fue el anhelo de acumular tesoros del hirsuto español, no menos fuerte y poderoso fue el celo del nativo que defendía con su vida y su pasión sus justos derechos y sus posesiones.

El devenir histórico con sus consecuencias de orden social y económico, fue marcando nuevos rumbos al ya famoso Farallón. En el pasado siglo, el arte del orfebre en su maravilloso moldear fantasías acuñó el oro y la plata en la necesidad espiritual de lo bello.

Dejando un poco aquellos tiempos a la historia, consideremos sucintamente los acontecimientos posteriores.

Fue en los meses del verano de 1936, cuando Abel Peirano, a quien rindo mi homenaje, entonces profesor de la Universidad de Tucumán, recorría las montañosas regiones del ubérrimo oeste catamarqueño en busca ansiosa de encontrar el misterio de la naturaleza, que por indicación de un lugareño tomó conocimiento de Agua de Dionisio. Allí contempló con absorta inquietud los viejos socavones, testigos mudos y solitarios de antiguos esfuerzos del hombre, y vetas doradas, desafiantes y tentadoras.

Estos redescubrimientos motivaron una publicación de la Universidad de Tucumán bajo la firma de Peirano (tomo I, Nº 1) describiendo con amplitud la zona minera.

En 1942, dos hermanos de Peirano hacen pedido de cateo. Con el tiempo se sumaron idénticas solicitudes con la intención de iniciar nue-

vamente los trabajos de la mina. Los intentos se renovaron y el Farallón Negro siguió siendo siempre la promesa nacional. Se convirtió un poco en leyenda y el sentir argentino dilató en su magnitud potencial una posibilidad más en su pujante avance económico. Hoy el Agua de Dionisio debe ser considerada como una de las mayores reservas económicas con que cuenta la República.

Creo conveniente intercalar en esta exposición los juicios que el presbítero Arch, un estudioso de los problemas catamarqueños, expresa con respecto a las posibilidades mineras en la provincia de Catamarca. Dice el mencionado sacerdote: «Nadie duda de que el porvenir minero del país se encuentra en gran medida vinculado a Catamarca. Bien podríamos llamarla "la provincia de las reservas mineras", pues hasta el presente su enorme potencial minero de 55.000 kilómetros cuadrados se encuentra prácticamente intacto. Pues bien, cuando se habla del porvenir minero de Catamarca, instintivamente se piensa en la región que hoy nos ocupa, es decir, la zona cordillerana y el altiplano. Teniendo un camino nacional —como existe de Fiambalá a San Francisco, límite con Chile— las posibilidades de la precordillera tinogasteña son más halagueñas que las de cualquier otra zona. Para citar siquiera algo de esa enorme reserva, y sin apartarnos de la ruta 60, digamos que ya se encontró uranio, cobre, carbón de piedra, plomo y en gran cantidad depósitos de azufre y oro en el cerro Incahuasi».

Y antes de concluir esta exposición, señor presidente, quiero rendir un emotivo homenaje al pueblo de Catamarca, por haber sido protagonista principal de las jornadas inolvidables y patrióticas del 24 de marzo del corriente año. En ellas, el pueblo catamarqueño puso de manifiesto su estado de rebeldía cuando se sintió amenazado en sus más caros intereses. Y hoy, en el mes de septiembre, también día 24, jubilosamente evocamos todos los argentinos, y muy especialmente los hombres del norte y noroeste argentino, el día de la Virgen de las Mercedes, proclamada por Belgrano generala de los ejércitos de la patria; un nuevo aniversario del glorioso triunfo del Campo de las Carreras, esa batalla del Tucumán librada por las masas populares anónimas y esperanzadas para asegurar la independencia y la libertad, que no sabían bien quizá de qué se trataba, pero que tenían la intensa, la profunda intuición de que era ése su destino.

Evoco a esos dos 24, y auguro que estas coincidencias sean el anuncio de realizaciones constructivas y que toda esta esperanza de Farallón Negro se convierta en una hermosa realidad.

También quiero rendir homenaje a la ciencia a través de la Universidad de Tucumán, que en comunidad de sentimientos con el obrero de la provincia que tengo el honor de representar, el que abrirá picadas y construirá caminos, señala

la conjunción de la ciencia y el músculo, que en perfecta armonía engrandecerán a la patria. Algún día, en simbólico monumento, Catamarca y Tucumán mostrarán al país el estrecho abrazo de sus propias grandezas que en la hermandad provinciana tienen un profundo sabor a emoción. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — Señor presidente: con este proyecto de ley que estamos considerando termina un conflicto entre el espíritu creador, investigador y de promoción del bienestar general, de un centro de estudios argentino, y el profundo arraigo y amor a la tierra de los habitantes de Catamarca, que pugnaban por imponer una dirección a esa obra alentada por ambas partes por una idéntica finalidad de beneficio común. Sin embargo, señor presidente, no todo se desarrollaba en un ambiente de plena limpidez en ese conflicto de nobles pasiones.

No faltaron algunos intereses pequeños, de escasa significación felizmente, que pretendieron enturbiar las aguas revueltas que, a pesar de la intensa pasión puesta al servicio de las altas causas que servían, aún se mantenían limpiadas. Otras personas, sin que puedan calificarse las que representaban intereses mezquinos, trataron de ejercitar derechos privados durante esta ya larga discusión de derechos entre la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca, y es así como, en un momento determinado, llegó a temerse que pudieran ponerse en riesgo los intereses nacionales que representan los yacimientos de Hualfin o Agua de Dionisio.

Mientras una entidad nacional alegaba que tenía derechos y otra entidad nacional, la provincia de Catamarca, sostenía que esos derechos habían caducado, se ha pretendido ver y encontrar en esa circunstancia una fisura por la cual podría haberse facilitado la petición de derechos particulares que vendrían en determinado momento a poner en riesgo la obra común que se quiere realizar.

Felizmente, esos intentos no han podido lograrse.

Los derechos de la nacionalidad a través de la provincia de Catamarca y los derechos tenazmente defendidos también por ese otro ente nacional que es la Universidad Nacional de Tucumán, no han dejado ningún resquicio por donde pudiera ponerse en duda el derecho de la Nación a disponer, por medio de esta ley que hoy estamos considerando, el destino final de esos yacimientos.

Para fundamentar esa afirmación es que me voy a permitir señalar algunos aspectos de orden jurídico, que ya antes fueron invocados, aun a riesgo de cansar la atención de la Honorable Cámara.

Los trabajos realizados por el doctor Abel Peirano, entonces director del Instituto de Mineralogía y Geología de la Universidad Nacional de Tucumán, desde el año 1936, dan por resultado el descubrimiento de la riqueza y posibilidades económicas de este yacimiento. El doctor Peirano sostuvo que los filones se originaron por el relleno progresivo con aguas ascendentes cargadas de minerales, entre ellos oro, plata y manganeso, en las profundas grietas que se habían formado en la corteza terrestre.

Los filones así formados habían sido empobrecidos en su superficie por la acción secular de las aguas pluviales. Mientras Peirano sostenía que estas aguas retransportaron la mayor parte de los minerales de la parte superior hacia abajo, existiendo en consecuencia a cierta profundidad una zona enriquecida, otros técnicos opinaban que sólo restaba de los filones la parte pobre profunda, habiendo desaparecido mucho tiempo atrás la zona enriquecida, por la acción de la erosión de los vientos.

Es digno de destacar, señor presidente, que ese técnico argentino llegó a aquellas conclusiones merced a un profundo espíritu analista de observación y comparación con las crestas y lomas vecinas y la textura orográfica de la zona; y como consecuencia de dicha observación y la aplicación de una razonada y científica deducción, pudo llegar a la conclusión que más tarde habría de confirmarse por los medios técnicos que se le facilitaron.

Se realizó en esas circunstancias una primera y luego una segunda inscripción de permisos de cateo a nombre de funcionarios de la universidad, permisos que también vencieron por no conseguirse recursos para la exploración. Por fin, se realizó la tercera inscripción de permisos de cateo a nombre de los señores Clímaco Gastón de la Peña, Eduardo Santiago Fanjul, Eduardo Aguilera y Héctor Oscar Garolera, quienes conforme a la voluntad del descubridor de la mina, o mejor dicho, del redescubridor, doctor Peirano, donaron sus derechos a la universidad, la que, por resolución del consejo superior, los aceptó y dió comienzo a la labor de exploración.

Cabe destacar que la universidad acogió la tesis del doctor Peirano pese a haber sido controvertida por técnicos de reconocido prestigio que negaban valor económico al yacimiento, y a las desalentadoras experiencias anteriores, y arriesgó fuertes sumas de dinero que era necesario invertir en esos trabajos de exploración.

Mediante inversiones de alto costo se construyó el pique número uno, al que hizo referencia el miembro informante, y las demás obras que mencionó.

Los trabajos realizados por la universidad dan como consecuencia la comprobación práctica de la exactitud de la tesis sostenida por el

doctor Peirano, lo que significa demostrar en forma incontrovertible la riqueza e importancia de un yacimiento que, con anterioridad, había sido desechado tanto teórica como prácticamente.

Este magnífico descubrimiento fue comprobado por técnicos de la Dirección Nacional de Minería y por una comisión designada por el gobierno de Catamarca, constituida por los señores doctor Ramón Bonaterra y técnicos mineros Dardo Olaizola y Víctor Marchetti, quienes permanecieron en la mina durante un largo tiempo.

Como consecuencia de lo expuesto, se puede afirmar que en la fecha de iniciación de los trabajos de la universidad, el yacimiento de Agua de Dionisio había sido desechado tanto por los teóricos como por los mineros, en base a tesis geológicas contrarias a la que sostenía el doctor Peirano y a las dificultades y fracasos de las iniciativas de exploración y explotación.

Como consecuencia de ello, a la fecha de la inscripción de los permisos de cateo donados a la universidad, no existían en la zona otros permisos de cateos vigentes ni denuncias de descubrimiento ni menos explotaciones en marcha.

Acogiendo la tesis del doctor Peirano, la universidad asumió todos los riesgos de la exploración minera e invirtió cuantiosas sumas de dinero en Agua de Dionisio cuando todos los precedentes resultaban desalentadores.

Los trabajos de la universidad dieron por resultado la comprobación de la tesis del doctor Peirano y la consiguiente demostración de la riqueza del yacimiento.

Cabe destacar que los trabajos de la universidad no se realizaron en forma clandestina, sino mediante permisos de exploración debidamente inscritos y siempre con una amplia publicidad.

En este estado de la exploración de Agua de Dionisio, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.934/51, cuyo artículo primero estableció la reserva nacional sobre la zona en que realizaba sus trabajos la universidad, para su exploración y explotación por parte de la Dirección Nacional de Minería.

Este decreto, que se dicta encontrándose vigentes los permisos de cateo donados a la universidad poco tiempo antes del vencimiento de los términos correspondientes, conforme al Código de Minería, significó la exteriorización de la voluntad del gobierno de la Nación de realizar por su cuenta y por intermedio de la Dirección Nacional de Minería, la exploración y eventual explotación del yacimiento de Agua de Dionisio.

El consiguiente desplazamiento de la universidad del yacimiento está dado por las siguientes consideraciones: porque, a pesar de reconocer el artículo 2º del decreto los derechos preexistentes —lo cual importa reconocer los

derechos donados a la universidad— la sistemática del decreto y los actos realizados como consecuencia del mismo, hicieron imposible su ejercicio por parte de la universidad.

En efecto, el ejercicio de tales derechos por la universidad hubiese llevado a una ilógica e imposible superposición de cateo y exploraciones y la denuncia de descubrimiento para la explotación, con la consiguiente reducción del número de pertenencias, dentro de la zona de reserva, con la inevitable destrucción de las posibilidades económicas de la explotación. Es importante destacar esta circunstancia, señor presidente, porque dio pie, desde el punto de vista legal, al conflicto que se produjo luego, ya que la provincia de Catamarca sostuvo que durante ese período la universidad perdió sus derechos al dejar vencer el término legal sin realizar ciertos actos que pudo hacer no obstante la ocupación por la Dirección Nacional de Minas.

Por otra parte, el estado de las exploraciones no hacía aconsejable, por premura, una tentativa de explotación, razón por la cual debían continuarse las tareas de exploración.

Para ello la universidad hubiese debido renovar los permisos de cateo, lo cual resultaba imposible por expresa disposición del artículo 2º del decreto y la reserva establecida por su artículo primero.

También surge de dicho decreto el reconocimiento de los derechos de la universidad que implica el artículo 2º del decreto, pero la imposibilidad de su ejercicio, que surge de su sistemática y conclusiones, supone la suspensión del curso del término de cateo, a partir de la fecha del decreto.

Posteriormente decretos prorrogaron ininterrumpidamente la reserva nacional sobre Agua de Dionisio hasta la fecha. Los trabajos realizados en el yacimiento por la Dirección Nacional de Minería, la cual subcontrató algunos de ellos con la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, no sólo importaron la comprobación fehaciente de las conclusiones de la exploración realizada por la universidad, sino que al ubicar y determinar la ley del mineral contenido en una porción del filón intensamente explorado, han hecho recién factible su explotación, y por sobre todo, sirven esos trabajos y esa posesión, diremos así, para haber mantenido dentro del dominio público esos yacimientos que se discutían.

Durante el período de reserva nacional, la Universidad Nacional de Tucumán ha mantenido una conducta, digamos, que sin solución de continuidad importa la afirmación de sus derechos y la manifestación clara y terminante de su voluntad de realizar la explotación de ese yacimiento, hecho por otra parte controvertido por la provincia de Catamarca. Y pongo de relieve, señor presidente, estas dos circunstancias: mientras la universidad sostiene que mantuvo en forma con-

tinuada e ininterrumpida su posición y voluntad de explotación y exploración de la mina, la provincia de Catamarca también viene manteniendo el dominio eminente de la propiedad minera. Y vuelvo a destacar, señor presidente, que si hago mención de estos antecedentes, que fueron en su hora enojosos, es al solo efecto de demostrar que no hay resquicio alguno por donde el Estado nacional o provincial haya perdido sus derechos para dictar esta ley y disponer el destino final de la mina.

Al iniciarse los trabajos de la Dirección Nacional de Minería, la universidad cedió en préstamo, mediante contrato, sus instalaciones, planta piloto y maquinarias, etcétera, existentes en Agua de Dionisio, cooperando eficazmente en las labores realizadas por esta repartición. Este primer contrato, de una duración de un año, fue sucesivamente prorrogado, conteniendo estos instrumentos una cláusula concebida en los siguientes términos: «Queda sobreentendido que el uso de todos estos bienes que la universidad presta a la Dirección Nacional de Minería es con el objeto de que la misma, en el plazo estipulado, directamente o por intermedio de terceros, complete la exploración minera ya iniciada en dicho yacimiento, para entregarla para su explotación a la Universidad Nacional de Tucumán, de acuerdo con los derechos que a ésta le asistan.»

La Universidad de Tucumán, desde entonces, se sintió desplazada de la mina hasta el presente en que no tomó posesión efectiva, no obstante sostener que mantiene la posesión legal, diremos así, de los derechos de cateo y de exploración.

Cuando, como consecuencia de la derogación de la reforma constitucional de 1949, se dictó el decreto ley nacional por el cual se devolvía a las provincias su jurisdicción minera, poniéndose nuevamente en vigencia las disposiciones respectivas del Código de Minería, con fecha 9 de septiembre de 1956, la universidad presentó inmediatamente un escrito suscrito por su representante especial doctor Celedonio Gutiérrez, a la Dirección de Minas de la provincia de Catamarca, cuya parte substancial es ocioso leer; pero a raíz de ese escrito la provincia de Catamarca y el gobierno de la Nación dictaron sendos decretos de reservas sobre Agua de Dionisio.

Con estos decretos se cerró toda posibilidad de explotación privada y aseguró el mantenimiento en el dominio público de la propiedad minera que hasta hoy detenta la provincia de Catamarca.

La Universidad de Tucumán, tenedora de los derechos que le cedieron quienes habían inscrito derechos de cateo y de exploración, discutió que el término de 300 días que acuerda el Código de Minería para registrar las pte-

nencias, no había caducado en razón de la reserva nacional que había hecho el Estado nacional, esto es, que hubiera vencido dicho término y que durante todo ese tiempo de la posesión material y legal por la Dirección Nacional de Minería le fue imposible poder realizar las tareas necesarias para ubicar, mensurar y efectuar los demás trabajos que impone el código de minería, cumpliendo los requisitos necesarios para obtener la propiedad minera.

En ese interregno se produjo la reforma constitucional de 1949 y luego su derogación, e inmediatamente de pasar la propiedad minera nuevamente a la provincia de Catamarca mediante un decreto de 1956 del entonces gobierno provisional, se planteó el problema inmediato de a quién pertenecían los derechos mineros sobre dichos yacimientos. Por eso es importante destacar que ese mismo día, y a raíz del escrito presentado por la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Estado nacional dictaron decretos de reserva minera, que son los que rigen hasta el día de hoy.

De ese modo, señor presidente, en ningún momento se ha interrumpido el dominio minero que posee la provincia de Catamarca hasta el presente. Posteriormente se dictó el decreto 570 de 1957 —que por esta ley derogamos—, por el cual creaba un organismo especial para la explotación de esos yacimientos. Se habilitaba en primer término a la Universidad de Tucumán para que tuviera facultades para dicha explotación. Sin embargo, esas facultades no podían haber sido ejercidas si no se convenían antes con la provincia de Catamarca las condiciones en que se realizaría la cesión a esa entidad oficial que se creaba por el decreto 570 de los derechos mineros que le correspondían y corresponden hasta hoy a ese Estado provincial.

Es así, señor presidente, como llega a su punto culminante el conflicto entre la Universidad de Tucumán y la provincia de Catamarca, donde afloraron nobles pasiones, que no defendían causas personales ni intereses individuales, sino derechos y causas superiores tendientes al progreso y bienestar general de esa zona del país y de toda la Nación.

Llegamos a la feliz culminación por el mejor de los caminos, por la mediación e intervención directa del Poder Ejecutivo de la Nación a través de la persona del señor vicepresidente de la República, doctor Alejandro Gómez, presidente de este Honorable Senado; del señor secretario de Industria, doctor Tedín; de los diputados y senadores nacionales de ambas provincias, Catamarca y Tucumán; representantes especiales del pueblo y gobierno de Catamarca, que habían constituido una comisión especial, y también de la Universidad Nacional de Tucumán en un ambiente de gran comprensión mutua, que permitió arribar a esta feliz culminación, haciéndolo

se posible el anhelo de ese idealista que es el doctor Peyrano, y el de los jóvenes que han participado con su esfuerzo personal para poder ubicar la importancia del yacimiento, que hicieron donación del mismo a la Universidad de Tucumán, con plena conciencia de su valor, como así el del pueblo de Catamarca, que salió a la calle a defender sus legítimos derechos, del mismo modo que los funcionarios de una y otra entidad.

En todo este proceso, señor presidente, se advierten las más puras y mejores fibras del espíritu nacional. Una y otra parte, que llegaron a conmover al país con ese conflicto, han puesto por encima de todo interés personal y mezquino, el interés general, y eso nos alienta y enorgullece como argentinos y representantes del pueblo de esas provincias en este Senado.

El proyecto, que ha sido tan medulosamente analizado por el señor miembro informante de la Comisión de Industria, contiene previsiones concordantes con la línea que se viene observando a través de toda la acción de este gobierno; es decir, el de una real y efectiva independencia económica del país. Comienza esa acción con el rompimiento de los cercos que nos asfixiaban en la esfera de la explotación energética, mediante la firma de los contratos para la colaboración con YPF en la explotación del petróleo y la sanción de la ley de nacionalización, cuya discusión pronto ha de llevarse a cabo. Sigue con la promoción de yacimientos carboníferos de Río Turbio y continúa hoy con esta ley por la cual se crea el YMAD, entidad que ha de promover una inmediata explotación del rico yacimiento de manganeso, que habrá de posibilitar en el país la industria siderúrgica.

Llegaremos así a fortalecer las estructuras básicas fundamentales del país, esto es, hierro, carbón, petróleo, energía eléctrica, al mismo tiempo que se impulsa nuestra producción agropecuaria y se defiende en el extranjero el valor de sus frutos y el esfuerzo de nuestros hombres de trabajo. Allí se complementa la política económica y de defensa nacional del actual gobierno, con el cual nos orgullecemos en colaborar desde estas bancas.

Creemos que mediante las disposiciones contenidas en los artículos 5º y 10, inciso c) del proyecto en discusión, esos yacimientos estarán perfectamente a salvo de toda intromisión de intereses privados que tengan por objeto principal, no el bienestar general del país, sino el lucro personal.

El artículo 5º establece como condición para la entidad que no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas priva-

das, nacionales o extranjeras, ni a empresas mixtas, nacionales o provinciales.

Sin embargo, como no todo puede llevarse a cabo directamente, quizá pueda convenir, desde el punto de vista económico y técnico, que no sea la misma entidad la que realice tareas accesorias que en determinado momento pueden resultar más costosas y menos eficientes que las que pudieran brindar empresas nacionales o extranjeras, como simple locación de servicios o de obra.

El artículo 99, inciso c), establece que no podrán ser miembros del directorio los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la exploración, explotación, industria y comercio privado del oro, la plata y el manganeso, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.

Y se agrega luego, en el inciso c) del artículo 10, que el directorio podrá disponer la organización interna de la empresa y reglamentar y aprobar las normas complementarias del régimen de contratación de obras y servicios, adquisiciones, etcétera. Es decir, que es una línea concordante con la seguida por el gobierno de la Nación en cuanto a la explotación del petróleo.

Habiendo sido el propósito principal de mi intervención en este debate demostrar que desde el punto de vista jurídico no hay posibilidad alguna de discusión del derecho de la Nación para disponer sobre los yacimientos de Agua de Dionisio, solamente resta expresar, señor presidente, nuestra confianza en la juventud de nuestra patria, en la juventud de Catamarca y en la juventud estudiosa de todo el país, particularmente en la que se congrega en la Universidad Nacional de Tucumán, para que pongan allí de manifiesto su espíritu creador, su eficiencia y aptitud, sus fuertes dotes morales, su fuerza de voluntad y espíritu de sacrificio para el bienestar común.

Estamos absolutamente seguros, señor presidente, de que con este proyecto —que ha de convertirse en ley, a no dudarlo, con la sanción de la Cámara de Diputados— habremos consolidado no solamente el sentimiento fraterno de dos pueblos argentinos, sino también que habremos entregado un importante instrumento más para lograr la efectiva independencia económica del país.

Nada más. (*Aplausos en las bancas y galerías.*)

Sr. Bazán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Bazán. — Señor presidente: he escuchado con toda atención y sumo interés el magnífico informe del señor senador Bayol, miembro informante de la Comisión de Industrias, que revela un exhaustivo estudio del problema,

objeto del presente proyecto de ley que envié a esta Honorable Cámara el Poder Ejecutivo, y el conocimiento de los antecedentes que, como el «Estudio Minero-Económico de Farallón Negro» realizado por el ingeniero Alberto Monchablón, tienen una importancia capital.

También he escuchado la relación de los antecedentes jurídicos del señor senador por Tucumán, y creo que ello me exime, señor presidente, de entrar en consideraciones técnicas ya conocidas y estudiadas por las partes interesadas, y sólo quiero, como representante de un Estado provincial minero por excelencia, que, no obstante las fabulosas riquezas que yacen dormidas en su subsuelo, permanece en un inconcebible e inaceptable nivel económico en virtud de diversos y sucesivos errores de los gobiernos, que no han sabido comprender y dirigir su acción tendiente a promover la única fuente de riqueza capaz de sacar a Catamarca de su postración: la minería.

Por su configuración topográfica, nuestra provincia está destinada a depender fundamentalmente de la riqueza de sus montañas, que ocupan el 77 por ciento de su superficie. La minería tenía que ser, entonces, forzosamente, una actividad principal de sus primitivos habitantes, y también de los pobladores posteriores que han seguido hasta la fecha pirqueando en la mayoría de los casos.

Las actividades agropecuarias no pueden operar ninguna transformación fundamental en un Estado que sólo riega el uno por mil de su territorio. No obstante estar considerada como una de las tres provincias que aprovechan al máximo sus cursos naturales de agua, con un promedio de 9,5 habitantes por litro segundo disponible, la escasez de mayores recursos hídricos origina la migración forzada de la población rural.

Además, la carencia de grandes recursos hidroeléctricos significa la imposibilidad de radiar grandes industrias manufactureras.

Sólo queda entonces como única esperanza de solución al estado de depresión y subdesarrollo económico, la industria minera, que podría tener una magnitud insospechada por la sorprendente calidad, cantidad y diversidad de los minerales encerrados en sus entrañas.

Creo, señor presidente, que estamos empezando a comprender la real importancia que la industria minera tiene para varias provincias argentinas y para el país en general. Así lo ha demostrado el interés que en el caso de Farallón Negro han puesto el excelentísimo señor presidente de la Nación, el señor vicepresidente, el señor secretario de Estado de Industria y Minería, doctor Tedín, y todos los que de una u otra manera han tenido la responsabilidad de la solución de este problema que ha alertado a la opinión de toda la República y que mantiene en tensión al pueblo de nuestra provincia, que

espera ansioso se concreten sus lógicas aspiraciones para poder contribuir con su esfuerzo al engrandecimiento de Catamarca y, por ende, del país.

Para mi provincia, la explotación de Farallón Negro significa el comienzo de una etapa nueva, el primer paso en firme dado para movilizar sus enormes recursos minerales y el despertar de la industria minera. Será el primer caso en que la explotación de una mina se haga con sus correspondientes estudios previos, aplicando la técnica moderna.

Además, esta explotación y las actividades relacionadas con ella crearán fuentes de trabajo que evitarán en parte el éxodo de los habitantes de su zona de influencia, que hasta hoy constituye un agudo problema para Catamarca, que provee de mano de obra a la zafra azucarera de Tucumán, Salta y Jujuy; a la industria petrolera de Mendoza, Comodoro Rivadavia, etcétera, y que, con la migración selectiva de sus maestros y otros profesionales, contribuye a la despoblación de la provincia, a tal punto que lleva a dudar acerca de si hay más catamarqueños en Catamarca o fuera de ella.

Farallón Negro, situado en una zona riquísima en toda clase de minerales de la mejor calidad, puede ser la provechosa experiencia para la explotación de muchos otros importantes yacimientos, 57 de los cuales figuran en la planilla que pongo a disposición de los señores senadores y que, para mejor ilustración, pido al honorable cuerpo autorización para que sea insertada en el Diario de Sesiones.

Felizmente, esta región está cruzada de Sur a Norte en toda su extensión por la ruta nacional 40, en buen estado, y que con algunos ensanches de curvas y rectificaciones facilitará el tránsito de camiones de alto tonelaje y sus acoplados, y hará más económico el transporte de materiales para las instalaciones, como asimismo de los minerales beneficiados.

Haciéndome eco de la urgencia del caso, he presentado un proyecto de comunicación, aprobado por este Honorable Senado, tendiente a que el Poder Ejecutivo, por intermedio de Vialidad Nacional, realice los trabajos que permitirán el tránsito por su camino natural desde Los Nacimientos hasta Belén, pasando por los importantes pueblos de Hualfin, El Eje, San Fernando, La Ciénaga y La Puerta de San José.

En lo que respecta a lo leído por el señor miembro informante de la Comisión de Industria, quiero referirme al párrafo que figura en la página cuatro, y que dice: «La distancia de la mina a estación Andalgalá, del Ferrocarril General Belgrano, es del orden de los 188 kilómetros por las rutas actuales, que en general no son apropiados para una explotación del tipo que estamos considerando, pues en

su mayoría el camino no es apto para transportes pesados.»

Disiento, señor presidente, con el señor miembro informante, por cuanto sostengo que en su mayoría esta ruta nacional es apta para transporte pesado. Así lo afirma el ingeniero Monchablón, en su estudio, base de este proyecto, en el capítulo tercero, cuando dice en el inciso c) «que para el mantenimiento de tráfico pesado, y especialmente de camiones con acoplado, sería menester rectificar algunos tramos de camino». Vale decir, que con el arreglo de esos pocos tramos el camino, en general, quedaría apto para el transporte pesado.

Sigo leyendo el mencionado informe, que dice así: «Existe, sin embargo, la posibilidad de construir un camino adecuado directamente de la mina hasta la estación Andalgalá, que si bien exigiría una fuerte inversión, reduciría la distancia a menos de la mitad de la actual.»

Quiero, para conocimiento de los señores senadores, manifestarles que la zona que atravesaría esta variante es enteramente montañosa, despoblada y que carece de agua. Me remito nuevamente al informe del ingeniero Monchablón, quien al estudiar la variante, dice: «Tramo Farallón Negro-Quebrada de Amanao. Característica: la variante por Amanao exige inversiones fuertes en camino de cornisa del orden de 45 kilómetros. Existe huella de 15 kilómetros hasta la ruta, la cual exigirá mantenimiento y reparaciones. Luego, 20 kilómetros hasta Andalgalá por la ruta número 62.»

Es verdad, señor presidente, que esta variante reduciría el kilometraje hasta la estación de embarque de Andalgalá, pero resulta que las dos terceras partes de este camino serían de cornisa, lo que exige sumas ingentes para su construcción, calculadas en más de un millón de pesos por kilómetro, e insumiría más de cincuenta millones de pesos. Y por él no podría hacerse el transporte en camiones de alto tonelaje, como es de suponer.

«Mientras tanto —dice más abajo el ingeniero Monchablón—, de ambas rutas será la más conveniente aquella que permita el transporte de camión con acoplado». Desde Belén a estación de embarque Andalgalá hay 90 kilómetros de la ruta 62, y tiene una pequeña cuesta cuyo ensanche solicité también por el mencionado proyecto, y de Belén a estación de embarque Cerro Negro hay 65 kilómetros por la ruta provincial, que atraviesan en su mayoría terreno llano.

Resulta entonces, señor presidente, que el camino natural mejor y más corto para el transporte de los materiales para la instalación de la planta y otras necesarias, como asimismo, del mineral beneficiado, sería el que va desde Los Nacimientos hasta Londres, por la ruta nacional 40 y desde allí continúa directamente hasta

la estación Cerro Negro del Ferrocarril General Belgrano.

No quiero abundar más, señor presidente, en otras consideraciones, aunque la importancia del asunto lo requiera, porque casi todas han sido contempladas ya durante su estudio, y porque comprendo que es escaso el tiempo de que dispone este cuerpo para tratar otras cuestiones. Quiero expresar, sin embargo —remitiéndome nuevamente al estudio del ingeniero Moncha-blón—, para desvirtuar algunas afirmaciones, según las cuales habría en Farallón Negro vetas de 20 a 50 centímetros por algunos kilómetros de largo de oro casi puro, que esto no es exacto. A este respecto, el aludido ingeniero expresa en su informe: «El oro se presenta en diminutas escamas y pajuelas no observables a simple vista. Las dimensiones máximas oscilan entre 0,015 a 0,020 milímetros.»

Sólo quiero agregar, señor presidente, que soluciones como éstas, que hacen a problemas fundamentales, constituyen la prueba cabal de que los actuales gobernantes cumplen con el pueblo, y que la Unión Cívica Radical Intransigente es fiel y consecuente con su programa de liberación integral del hombre argentino.

Y para terminar, quiero manifestar que se me ocurre que Farallón Negro simboliza el despertar minero de Catamarca y ha de permitir a nuestra provincia sumarse a la vigorosa transformación económica de la Nación en esta era de auténtico federalismo, de libertad plena y de trabajo fecundo. Nada más. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el pedido de inserción del señor senador por Catamarca.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — Se hará la inserción solicitada (1).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración en particular.

—Al comenzar a leerse el artículo 1º, dice el

Sr. Rocha Errecart. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Buenos Aires.

Sr. Rocha Errecart. — Como todos los señores senadores tienen sobre sus pupitres el proyecto de ley que estamos tratando, y como su articulado ha sido considerado en su casi tota-

lidad, hago moción para que se suprima la lectura de los artículos, enunciándoselos solamente.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Buenos Aires.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — Así se procederá.

—Sin observación, se enuncian y aprueban los artículos 1º a 8º.

—Se enuncia el artículo 9º.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Voy a solicitar la modificación del inciso c) del artículo 9º, que me voy a permitir leer. Dice así: «Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la explotación, exploración, industria y comercio privado del oro, la plata y el manganeso, excepto...», etcétera. Pido, señor presidente, que se substituya la enunciación «del oro, la plata y el manganeso» por las palabras «de minerales».

Entiendo que es el afán y el cuidado del Poder Ejecutivo que no haya ninguna vinculación entre los miembros del directorio de este ente estatal con las empresas que puedan tener un interés paralelo o concurrente con las explotaciones, no tan sólo del oro, la plata y el manganeso, sino de cualquier tipo de mineral.

El señor senador García, al hacer una maciza defensa jurídica demostrando la continuidad del dominio del Estado sobre las minas, de pasada señaló un hecho que debe mover a la meditación al Senado, y es que hay poderosos intereses que querían tener el dominio de las minas del Farallón Negro.

Entiendo que no es suficiente no estar conectado con las empresas que explotan el oro, la plata o el manganeso, que son lo fundamental de este yacimiento, porque también en esa zona puede haber otros minerales y cabría la posibilidad de una conexión con otras empresas que específicamente no se dedican a los minerales enunciados, llegándose en esa forma a integrar un directorio, burlando la disposición y el pensamiento que ha tenido el Poder Ejecutivo y nosotros al votar esta ley.

Es por ello que solicito que se elimine esa enunciación y se hable con carácter genérico de «minerales».

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor senador por Tucumán?

Sr. Vilchez. — Yo formo parte de la Comisión de Industria y el presidente y el otro miembro están ausentes del recinto, por lo que estaría inhabilitado para aceptar la modificación pro-

(1) Véase el Apéndice.

puesta. Para hacerlo, tendría que cambiar ideas con el otro miembro de la comisión.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Insiste el señor senador por Tucumán?

Sr. Juárez. — Son razones de tipo ético que hacen al éxito de esta iniciativa.

Sr. Bazán. — Yo había pensado pedir la modificación y además de oro, plata y manganeso, decir: «u otros mineras de primera categoría». Ruego al señor senador que me aclare su proposición.

Sr. Juárez. — Yo elimino la discriminación de minerales. No establezco si son de primera, segunda o tercera categoría según la clasificación del Código de Minería, que puede ser modificada. Establezco, de manera expresa, que no pueden formar parte del directorio aquellas personas que tengan relación de dependencia o intereses con la explotación, exploración, industria y comercio privado de minerales, cualquiera sea su tipo.

Sr. Bazán. — Apoyo la modificación propuesta por el señor senador por Tucumán.

20

MOCION

Sr. Fleitas. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Fleitas. — Propongo que pasemos a un cuarto intermedio de cinco minutos, en las bancas, a fin de que pueda integrarse la comisión, para considerar la modificación propuesta.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — Invito al Honorable Senado a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace, a la hora 21 y 30.

21

CONTINUA LA CONSIDERACION DEL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DE YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO — MINA FARALLON NEGRO

—A la hora 21 y 35, dice el

Sr. Presidente (Guido). — Continúa la sesión.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — En homenaje a la presencia del señor miembro informante de la comisión, por cuanto los argumentos que hice hace un instante no son conocidos por él, voy a repetir en parte los mismos.

Había solicitado la modificación del inciso c), a los efectos de que no quedasen enunciados de manera discriminativa cuáles serían los impedimentos para constituir el directorio según la relación de dependencia que tuviesen con compañías privadas que explotasen determinados minerales, según lo establece la redacción del inciso de referencia. Proponía concretamente la substitución de las palabras «de oro, plata y manganeso» por las palabras «de minerales». Es decir, que no podrían ser miembros del directorio aquellas personas que tuviesen, o hubieren tenido dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relación de dependencia o de intereses con empresas de explotación, exploración, industria y comercio privado de minerales, excepto sociedades cooperativas, de economía mixta, integradas exclusivamente por el Estado y usuarios. Esta es la redacción que propongo, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Bayol. — Señor presidente: la comisión considera muy atinada la modificación que propone el señor senador Juárez, por cuanto ella da más garantía a las partes contratantes; por consiguiente, la acepta.

Sr. Sánchez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: la he solicitado para hacer una ligera modificación que a mi criterio perfecciona el texto de la ley; sería la de invertir los términos del inciso sexto intercambiando entre sí los términos «explotación» y «explotación». La modificación tiene por objeto adecuar la redacción al desarrollo cronológico del proceso de tratamiento de los minerales.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor senador por San Juan?

Sr. Bayol. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará lectura al texto del inciso tal como queda definitivamente redactado.

Sr. Secretario (Sbarra). — (*Leyendo*): «Inciso c): Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la exploración, explotación, industria y comercio privado de minerales, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.»

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Considero que tendría que decir «...industrialización y comercialización

privada de minerales...» para que exista concordancia gramatical.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión la modificación gramatical propuesta por el señor senador por Entre Ríos?

Sr. Bayol. — Acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará lectura al inciso c) del artículo 9º, tal como queda definitivamente redactado, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

Sr. Secretario (Sbarra). — Dice así: «Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la explotación, explotación, industrialización y comercialización privada de minerales, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.»

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el artículo 9º, con las modificaciones en él introducidas.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 10, y dice el

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — Solicito que en el inciso g) de este artículo se suprima la frase que está entre comas y que dice: «de los créditos parciales que constituyen los rubros principales», de tal modo que el artículo quedaría redactado así: «Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios a los presupuestos, sin alterar su monto, dando cuenta al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros.»

El motivo para pedir la supresión de esta frase intermedia, es el de dar mayor amplitud y elasticidad a la labor interna del ente YMAD y que pueda manejar con toda la flexibilidad que sea necesaria su propio presupuesto dentro de los fondos que estén aprobados por la ley.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Bayol. — La comisión ya había propuesto la modificación en el despacho.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se va a dar lectura al despacho de la comisión, en el inciso g).

Sr. Secretario (Sbarra). — Dice así: «Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, en el presupuesto, sin alterar su monto y dando cuenta de ello

al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros.»

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Advierto, en virtud del pedido de modificación expresado por el señor senador por Tucumán, que lo que importa en este caso es darle a esta empresa, que tiene un tipo industrial y comercial al mismo tiempo —y repito sus palabras— la flexibilidad necesaria para que dentro de esto que va a ser el estatuto orgánico del ente, pueda actuar con libertad y no sentirse trabada por una disposición del inciso g). Porque digo a la Cámara que de mantenerse así como está, se va a encontrar inhibido este ente cuando deba constreñirse a hacer ajustes o compensaciones que estime necesarios de los créditos parciales que constituyan los rubros principales, sin alterar el monto de los mismos.

De ahí, señor presidente, que entiendo que se perfecciona el texto de la ley y se posibilita al ente la necesaria agilidad a los efectos de que sin violar su propio estatuto orgánico y ninguna disposición de la ley de fondo, pueda hacer los ajustes y compensaciones que estime necesarios en el presupuesto —repito— sin alterar el monto. Es decir que, en definitiva, y así interpreto las palabras del señor senador por Tucumán, se quiere darle una perfecta limpieza al precepto que establece el inciso g).

Por estas razones, señor presidente, voy a adherir a lo manifestado por el señor senador García.

Sr. Presidente (Guido). — El despacho de la comisión, en lo que se refiere al artículo 10, inciso g) introduce la modificación que solicita el señor senador García.

Sr. García. — En la versión impresa que tengo del mensaje del Poder Ejecutivo aún no se había incluido esta observación, de modo que si está en el despacho de la comisión...

Sr. Presidente (Guido). — En la primera página del orden del día 111 figura la modificación, señor senador. ¿Retira su indicación?

Sr. García. — Sí, señor presidente.

Sr. Juárez. — Voy a dar lectura, señor presidente, a la modificación del despacho de la comisión, que recién me entregan, y solicito al señor senador por Tucumán que, a su vez, compruebe si el despacho de la comisión modificando el proyecto del Poder Ejecutivo, coincide con lo que él propone.

El despacho de la comisión dice así: «Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, en el presupuesto, sin alterar su monto y dando cuenta de ello al Poder Ejecutivo nacional».

Sr. Presidente (Guido). — Señor senador: el señor senador García ha retirado su moción. Como usted había adherido a ella, ¿la hace suya?

Sr. Juárez. — Desco saber, señor presidente, si interpreté la modificación propuesta por el señor senador García.

Sr. García. — Señor presidente: el señor senador por Tucumán, mi colega de representación, no ha advertido —lo mismo que yo— que en la primera parte del despacho de la comisión figura la modificación introducida al inciso g) del artículo 10. Ya en la primera parte del orden del día —como lo hace notar el señor presidente—, la comisión hizo la supresión que nosotros proponemos ahora.

Sr. Villalba. — Lo que el señor senador Juárez está discutiendo es la modificación que introduce la comisión.

Sr. Juárez. — Yo me guío por el proyecto del Poder Ejecutivo, porque no tengo el despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Guido). — Se le hará llegar un ejemplar del despacho de la comisión, señor senador.

—Después de breves instantes de espera, dice el

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el artículo 10 con las modificaciones introducidas por la comisión al inciso g) del proyecto del Poder Ejecutivo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se enuncian y aprueban los artículos 11 a 14.

—Se enuncia el artículo 15, y dice el

Sr. Falco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Falco. — Advierto que en este artículo 15, en la parte en que se establece el aporte del Estado para hacer posible la explotación de estas minas, falta establecer a qué fuente debe recurrir el Poder Ejecutivo para hacer efectiva su promesa, porque en caso contrario este aporte de 150 millones de pesos quedaría nada más que en un anhelo.

Propongo, entonces, que se agregue al final del artículo lo siguiente: «importe que el Poder Ejecutivo tomará de rentas generales, con imputación a la presente ley».

Sr. García. — Sugiero que se agregue además la palabra «también», porque en la primera parte ya se habla de que los 20 millones serán tomados de rentas generales.

Sr. Bayol. — La comisión acepta la modificación propuesta por los señores senadores por Santiago del Estero y Tucumán.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se va a leer el artículo con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Sbarra). — «Artículo 15. Al constituirse YMAD el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos). Además, le otorgará en préstamo, sin interés, reembolsable en diez cuotas anuales a contar del cuarto año de su constitución hasta la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), importe que también el Poder Ejecutivo tomará de rentas generales con imputación a la presente ley».

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el artículo tal cual ha quedado redactado y ha sido leído por Secretaría.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba sin observación el artículo 16.

—Se enuncia el artículo 17, y dice el

Sr. Bazán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Bazán. — Deseo proponer la modificación de una palabra, en el inciso b) de este artículo.

Donde dice «...y a efectos de que el mismo resuelva, de acuerdo con las atribuciones que le acuerda el artículo 85...» etcétera, substituir las palabras «de acuerdo» por «conforme».

Sr. Bayol. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Quiero proponer un agregado al final de ese mismo inciso, redactado de la siguiente manera: «...En ningún caso las observaciones formuladas tendrán efecto suspensivo».

Voy a explicar la razón de mi proposición. Este artículo establece que la fiscalización del manejo de los fondos y ejecución del presupuesto será realizada por el Tribunal de Cuentas de la Nación, que podrá destacar periódicamente uno o más auditores a los efectos señalados en los incisos a) y b). Podría ocurrir que a través de esas inspecciones surgiera un manejo de fondos, no diré incorrecto, pero sí que no esté de acuerdo con lo que establece el Tribunal de Cuentas, y en esas circunstancias, a raíz del informe de uno de esos auditores podría paralizarse la actividad del ente.

La intención de este artículo es el control, pero el ente y el directorio, con plena responsabilidad, podrán hacer sus argumentos ante la inspección para demostrar que la auditoría en ese caso puede estar equivocada. Como la paralización de las actividades mineras puede representar la pérdida de millones de pesos para el

Estado argentino, debemos incluir una cláusula que permita que mientras se estudie ese informe de los auditores el ente pueda continuar trabajando.

Estas son las razones que abonan esta propuesta.

Sr. Falco. — Pido la palabra para formular una aclaración.

El Tribunal de Cuentas de la Nación no paraliza el movimiento de ninguna de las empresas que fiscaliza. Los auditores se limitan a controlar los actos realizados con anterioridad y a informar al Tribunal de Cuentas del que forman parte. Se trata en este caso de un exceso de celo del señor senador por Tucumán, pero entiendo que el agregado está de más.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

El tribunal de cuentas, en su dictamen sobre el proyecto —las referencias que hago forman parte del dictamen— admite que la facultad de observación que se le atribuye no tendrá carácter suspensivo, exacto, como lo manifiesta el señor senador por Santiago del Estero.

La referencia del artículo 85 de la ley de contabilidad, que atribuye carácter suspensivo a las observaciones del tribunal de cuentas, artículo 85, inciso a), se presta a futuras confusiones. Mi intención es que no haya posibilidad de equívocos y con mi propuesta nosotros no interferimos ni agregamos una norma que pueda después desvirtuar los fines de este artículo. El agregado que propongo, entiendo que no destruye la economía de la ley.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor senador por Tucumán?

Sr. Sánchez. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará lectura al inciso b) del artículo 17, tal como queda redactado.

Sr. Secretario (Sbarra). — (*Leyendo*):

«b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan, y si encuadran dentro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados. Los auditores propiciarán, ante el tribunal de cuentas y a efectos de que el mismo resuelva conforme con las atribuciones que le acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, sin que en ningún caso las observaciones formuladas tengan efecto suspensivo.»

Sr. García. — Pido la palabra, para apoyar la observación formulada por el señor senador por Tucumán.

Efectivamente, la mención del artículo 85 de la ley de contabilidad, que impone el efecto suspensivo a todos los actos que inspeccione y

observe, va a hacer que este artículo sea confuso. Por eso conviene que la ley sea explícita, para evitar dificultades a este ente que estamos creando.

En consecuencia, apoyo la indicación del señor senador por Tucumán, que propone que se incorpore al final que en ningún caso las observaciones formuladas tendrán efecto suspensivo.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el artículo 17 con las modificaciones propuestas, tal como ha sido leído por Secretaría.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se enuncian y aprueban los artículos 18, 19 y 20.

Sr. Juárez. — ¿El artículo 20 ya fue aprobado?

Sr. Presidente (Guido). — Sí, señor senador.

Sr. García. — Con la modificación que introdujo la comisión.

Sr. Juárez. — Deseo proponer una modificación a este artículo; en ese sentido formulo moción de reconsideración.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Tucumán para que se reconsidere el artículo 20. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Señor presidente: en el despacho, la comisión modifica la redacción del artículo 20, pero mantiene la facultad del Poder Ejecutivo para resolver la disolución y liquidación de la empresa por haberse declarado la caducidad de la concesión —ésta es una de las razones— «...o por alguna otra razón de similar importancia, que demuestre fehacientemente...».

Es decir, vuelve al proyecto del Poder Ejecutivo. Yo solicito que se modifique el artículo en el sentido de que el Poder Ejecutivo solamente pueda resolver la disolución y liquidación de la empresa en razón de haberse declarado la caducidad de la concesión.

Estimo que la disposición «...o por alguna otra razón de similar importancia...», no es concreta. Se da por esta vía al Poder Ejecutivo la posibilidad de que él indique la razón que tiene similar importancia, y la única razón de similar importancia, según el texto de la ley, sería otra de igual característica que la caducidad de la concesión. Yo me pregunto cuál sería esa otra razón.

Propongo entonces, concretamente, que el artículo 20 quede redactado así: «YMD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo nacional podrá resolver la disolución y liquida-

ción de la empresa, por haberse declarado la caducidad de la concesión». El resto del primer párrafo quedaría suprimido, y los párrafos siguientes del artículo 20 quedarían tal cual figuran en el despacho.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión la supresión propuesta por el señor senador?

Sr. Bayol. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará lectura del artículo 20 tal como queda.

Sr. Secretario (Sbarra). — «Artículo 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo nacional podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa por haberse declarado la caducidad de la concesión. En tales casos, el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley. El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro nacional. El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.»

Sr. Weidmann. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Weidmann. — Deseo que la comisión me aclare cuál va a ser la situación de este ente en el caso de que se produzca la cesación de pagos, ya que no podrá ser declarado en quiebra, y en virtud de que el señor senador por Tucumán propone que sólo podrá disolverse y liquidarse cuando se declare la caducidad de la concesión.

En un ente privado cualquiera, el procedimiento normal es la declaración de quiebra, pero como aquí se trata de un ente estatal y la quiebra no corresponde —a mi juicio con todo fundamento, porque el Estado es siempre responsable y jamás insolvente—, deseo que la comisión me aclare cuál será el procedimiento a seguir.

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — En el caso que plantea el señor senador por Santa Fe, de hecho se produce la necesidad de la liquidación, aunque no lo establezca la ley expresamente. Lo que desea el señor senador Juárez, al proponer la modificación, es evitar la intromisión deliberada del Poder Ejecutivo para producir la liquidación. Entiendo que en el caso de cesación de pagos, la liquidación es inevitable, y entonces tendremos que recurrir a las normas comunes del derecho civil para la liquidación de este tipo de entes.

Sr. Weidmann. — No me satisface la respuesta del señor senador García, porque éste es un ente autárquico, un ente estatal, y si no puede ser declarado en quiebra, debe determinarse el procedimiento a seguir para su liquidación en el caso de cesación de pagos. No hay ninguna liquidación de hecho: hay que establecer la norma jurídica, porque no es aplicable el derecho común; precisamente lo excluimos de él al decir que no puede ser declarado en quiebra. Si lo que se quiere es evitar una excesiva intromisión del Poder Ejecutivo, en lugar de emplearse la expresión que contiene el despacho «imposibilidad de continuar con el giro de aquélla», debería decirse «por hallarse en cesación de pagos». Pero que no se coloque a esta institución autárquica en un estado, digamos, de vida latente, en que el Poder Ejecutivo se encuentre inhibido, por imperio de las deficiencias de la ley, para hacer la liquidación correspondiente.

En ese sentido creo que la solución está en calificar este segundo caso para alejar el riesgo que teme el señor senador por Tucumán.

Sr. Rocha Errecart. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Rocha Errecart. — Entiendo que no habría ningún inconveniente en hacer la aclaración que propone el señor senador por Santa Fe. Pero se me ocurre lo siguiente: cualquier acreedor del ente autárquico puede reclamar judicialmente el pago de su crédito e inclusive pedir la quiebra. Lo que ocurre es que el juez no podrá declararla y en ese momento el acreedor puede solicitar que el Poder Ejecutivo asuma las facultades y las responsabilidades que le otorga la ley. Ese es el procedimiento que se presentará en la realidad de los hechos.

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — Evidentemente lo que se busca es crear un ente autárquico que esté al margen de las acechanzas a las que se ha hecho mención en este debate.

La redacción del proyecto para la creación de este ente, el equilibrio entre las provincias de Tucumán y Catamarca, y un presidente representante del Poder Ejecutivo nacional no es casual. Toda la contextura del proyecto está orientada a poner a la entidad que por él se crea a cubierto de cualquier acechanza de intereses extranacionales, que a veces son tan poderosos que llegan a infiltrarse en cualquier administración. Acepto como un hecho posible la prevención que tiene el señor senador por Tucumán. Y si ocurriera el caso que señala el señor senador por Santa Fe, es decir, que cayera en estado de cesación de pagos, puede suceder en cualquier instante, como lo ha expresado el señor senador por Buenos Aires, que un acreedor apresurado o inexorable, al vencimiento de un pagaré o de

una obligación de YMAD, ejecute el crédito cuando no hay disponibilidades para abonarlo, por ejemplo, lo que traerá aparejado que el ente caiga en cesación de pagos. Eso no debiera ser causa legal obligatoria de disolución.

Es cierto que en el proyecto se establece que el Poder Ejecutivo «podrá». No es imperativo en el sentido de que inmediatamente se opere la liquidación, pero ya deja abierta una amplia vía para los ataques que puedan llevarse contra esta entidad, tanto más si tiene el éxito que esperamos en su explotación.

Para el caso que plantea el señor senador por Santa Fe de que haya otras causas tan graves, como el agotamiento de la mina, por ejemplo, creo que sólo queda un recurso: volver al Poder Legislativo y dictar otra ley que dé destino al patrimonio de la empresa estatal. Creo que ésa sería la solución, y con la supresión propuesta por el señor senador por Tucumán queda a salvo el pensamiento del legislador, que es el de preservar a YMAD de cualquier ataque encubierto.

Sr. Fleitas. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Fleitas. — Deseo preguntar a la comisión si considera que la primera parte del artículo 20, tal como quedaría con la supresión propuesta, contempla suficientemente el caso de extinción de los recursos de la mina, vale decir, la necesidad de liquidar la explotación por falta de materia prima.

Sr. Bayol. — En ese caso, estaría la caducidad de la concesión.

Sr. Fleitas. — Pero la ley no contempla el caso de caducidad de la concesión por agotamiento de la mina.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Creo que nos estamos curando un poco en salud. La entidad todavía no ha nacido y ya queremos ver cómo va a terminar. Pareciera que hubiese un poco de pesimismo sobre el éxito que va a tener esto que nosotros creemos una gran empresa. Considero que lo fundamental es crearla, y ya veremos si el andar del tiempo demuestra que, sea por antieconómica o por agotamiento de la propia mina, todas las previsiones que estamos haciendo aquí están de más.

Adhiero a lo manifestado por el señor senador García.

Lo que hay que prever es que para un caso excepcional como ése —es decir que la mina resultare antieconómica—, el Poder Ejecutivo o las autoridades de este ente autárquico recaben la sanción legislativa pertinente para su correctivo, ya sea suministrándole más fondos o declarando la terminación de la entidad.

Después de todo, no va a ser la única institución minera de explotación deficitaria. Me parece

que no vamos a poder prever en este instante todas las posibilidades de su seguramente larga vida. Creo, por tanto, que basta prever el aspecto de la caducidad, dejando lo otro, que es marginal y más difícil: que sea antieconómica, o el agotamiento, ya que, según la gente de la región, parecería inagotable. Creo que iríamos muy lejos en la legislación.

De manera que adhiero a la moción del señor senador García, de que dejemos expresamente la previsión de la caducidad y lo otro relegado a una reforma legislativa cuando se presente el caso.

Sr. Weidmann. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Weidmann. — Insisto en que mi planteo no se refiere a la circunstancia casual de un acreedor que demande el pago de un crédito, sino al estado de efectiva cesación de pagos, o imposibilidad financiera de continuar funcionando. Ya sé que el Estado es responsable; pero ¿hasta cuándo va a estar cubriendo el déficit de una empresa industrial que no presta un servicio público y que tenga que ser mantenida a pesar de los quebrantos que arrojen los presupuestos anuales? ¿Y por qué no lo vamos a prever en la legislación, cuando hemos contemplado lo contrario? El procedimiento normal de liquidación de un ente, que es el de la quiebra, nosotros lo excluimos con muy buen fundamento. ¿Y por qué no prever lo otro?

No voy a hacer ninguna proposición, porque abrigo la esperanza de que este yacimiento jamás llegará a esa situación, pero para cubrir la responsabilidad legislativa dejo constancia de que este artículo es imprevisor.

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — Las manifestaciones finales del señor senador por Santa Fe prácticamente me conforman, ya que le alienta una inquietud de técnica legislativa.

Sin embargo, señor presidente, quiero destacar que este caso no es como el de cualquier otro ente autárquico que pueda crear el gobierno federal. Aquí no estamos dando nada; ni Catamarca, que permite la reglamentación de su dominio minero, ni la Universidad Nacional de Tucumán, que con el trabajo de sus hijos, trabajo personal de esfuerzo y sacrificio absolutamente individual, restando pequeñas partidas de su presupuesto, fue concretando esta posibilidad. Ambas tienen derechos preadquiridos a esta sanción que estamos haciendo nosotros. Con esto no hacemos más que reglar o poner fin al conflicto a que hemos hecho mención, entre la Universidad de Tucumán y la provincia de Catamarca. Es decir, señor presidente, que en el caso pesimista de que esta empresa fuera mal, tendríamos que recurrir a la misma vía

que estamos usando hoy, es decir, la sanción legislativa, para que vaya a poner remedio a esa posible situación de anormalidad o darle fin. El hecho de que se faciliten veinte millones de pesos y luego un préstamo de ciento cincuenta millones, con cargo de devolución, no habilita al Congreso ni al Poder Ejecutivo nacional para estar previendo ya la liquidación por otra causa ajena que no sea la caducidad de la concesión.

Por eso es que adhiero a la proposición del señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Celebro, señor presidente, que el señor senador por Santa Fe, en ese permanente cuidado de los dineros públicos, haya hecho las manifestaciones que hemos escuchado y con las cuales todos estamos de acuerdo.

Ninguno de nosotros va a votar inconsciente e irresponsablemente una entrega en blanco para que se cree un organismo que pueda estar usufructuando del esfuerzo de todo el pueblo del país, y tan no lo votamos y tan consciente y responsablemente estamos sancionando esta ley, que el artículo 19 de la misma establece que este ente deberá instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio, cuya capacidad mínima será de 250 toneladas por día, en un plazo máximo de siete años, a partir de su constitución, y realizar el desarrollo de una exploración adecuada; y en el inciso b) dice: «Mantener una producción relacionada con la capacidad de la planta»; y termina el artículo: «El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería.»

Es decir, señor presidente, que está previsto en la misma ley. No es que se vaya a mantener *in eternum* este ente, así estuviese dando resultado deficitario, así no tuviese potencialidad la mina.

Está previsto, y con esto se contesta a la inquietud del señor senador por Corrientes y se complace a la lógica y patriótica inquietud del señor senador por Santa Fe. Por consiguiente, señor presidente, está votando bien el Senado de la Nación. Nada más.

Sr. Bayol. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Bayol. — Señor presidente: para contestar al pedido sobre la capacidad de la mina, me voy a referir a las cifras resultantes de cubicciones de reservas que tengo a mi vista del ingeniero Monchablón y son las siguientes: sobre mil muestras, da un tonelaje bruto con 20 por ciento de dilución y 130.000 toneladas; oro fino recuperable, 1.340 kilogramos; manganeso recuperable, 15.000 kilogramos; ley media general oro recuperable, 10 gramos por tonelada; ley media general de manganeso recuperable, 11 por cien-

to. Solicitaria, señor presidente, que las planillas de cubicación y de leyes medias por niveles que figuran en el informe del ingeniero Monchablón se inserten en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor senador por Santa Fe.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — Se hará la inserción solicitada (1).

Sr. Vilchez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Vilchez. — Pienso, con relación a los argumentos que se han expuesto sobre el punto en discusión, tales como el posible agotamiento del yacimiento, etcétera, que quizás esto ya esté contemplado en el segundo apartado, donde dice: «El Poder Ejecutivo podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa.»

Indudablemente, y dado que la ley no puede ser casuística, me parece que todos esos supuestos estarían considerados en esta segunda parte, porque el Poder Ejecutivo no va a resolver la disolución sino cuando ocurra una causa grave, como por ejemplo el agotamiento de los yacimientos a que se ha hecho referencia. Entonces sería el caso de que el Poder Ejecutivo aplique esta parte de la ley que lo autoriza a resolver la disolución de la empresa. Vuelvo a decir que la ley no puede ser casuística; aunque este yacimiento no se agotase nunca, estarían siempre resueltos acá, en la segunda parte, a mi juicio, los supuestos a que se ha hecho referencia en este cambio de ideas sobre el artículo 20.

Sr. Arana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Arana. — He pedido la palabra para formular una breve corrección de sintaxis. Tal como ha quedado redactado el artículo 20 en su segunda parte, debe decir: «... En tal caso, el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino...»

Sr. Presidente (Guido). — El señor senador propone que se reemplace «tales» por «tal» y «casos» por «caso».

Sr. Arana. — Exactamente, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Bayol. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 20 tal como queda definitivamente redactado, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

Sr. Secretario (Sbarra). — Dice así: «YMA no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo nacional podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa por haberse decla-

(1) Véase el Apéndice.

rado la caducidad de la concesión. En tal caso, el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

»El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa que realice el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro Nacional.

»El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Sr. Presidente (Guido). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 21, y dice el

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — El artículo 21, tal como está proyectado, dice: «Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería.»

Solicito que se excluya la última parte del artículo, donde dice: «... con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería.»

Propongo esta supresión, en primer término, porque no hay otras contribuciones que establezca el Código de Minería que la del canon. En cuanto a éste, me parece impropio dejar a esta entidad con la obligación de regalía, en primer lugar, porque es un ente integrado por la propia provincia titular del dominio minero, y es socia principal, ya que se le asigna el 60 por ciento del producido de las utilidades que produzca el yacimiento. Por otra parte, el 40 por ciento restante va también a una entidad oficial, como es la Universidad de Tucumán, con el destino final de ser distribuido a todas las universidades del país, según las previsiones de esta ley. Vale decir que es impropio que en estas condiciones de absoluta solidaridad para tales finalidades de bienestar general, se hable de contribuciones al mismo Estado propietario, es decir, que la provincia tendría que pagarse a sí misma.

Y la parte en que podría beneficiarse con el canon que correspondería a la Universidad de Tucumán sería tan insignificante que creo que no valdría la pena mantenerla, sobre todo cuando para su aplicación va a tener que procederse

a la mensura de las pertenencias que, según el Código de Minería, deben ser de 60.000 metros cuadrados (6 hectáreas). En cambio, hoy sabemos, por la propia redacción de la ley, que son más de 400 kilómetros cuadrados. Para poder determinar el monto del canon, va a haber que subdividir en distintas parcelas y mensurar esa enorme extensión para saber el monto y la proporción del canon que tiene que pagar la entidad a la provincia de Catamarca, es decir, para pagarse a sí misma y recibir una pequeña utilidad adicional. Creo que, de acuerdo con el espíritu de esta ley, deberíamos suprimir esa disposición.

Sr. Presidente (Guido). — El señor senador propone la supresión de las últimas palabras del artículo a partir de «con excepción...»

Sr. García. — Exacto, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — ¿La comisión acepta la supresión?

Sr. Bayol. — Creo, señor presidente, que dado el espíritu con que se ha elaborado este proyecto, tienen que ser los representantes de la provincia de Catamarca los que deben dar su opinión en este caso.

Sr. Bazán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Bazán. — Quiero que me aclare el señor senador García si lo que propone es que después de las palabras «provincial y municipal», se suprima «con excepción del canon, etcétera» hasta el final del artículo.

Sr. García. — Exacto.

Sr. Bazán. — Voy a oponerme, señor presidente. Considero que es un derecho de la provincia al que no puede renunciar. Y con respecto al porcentaje que le corresponde a Catamarca y a la Universidad de Tucumán, ese asunto ha sido debatido extensamente en oportunidad de las tratativas de las dos partes, antes de firmar el acta de Farallón Negro.

Repito que me opongo en forma terminante a la supresión de las palabras «con excepción del canon» y si es verdad que no hay otras contribuciones de acuerdo con el Código de Minería, en todo caso podría suprimirse desde la conjunción «y» en adelante.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Creo, señor presidente, que hay un error de interpretación por parte del señor senador por Catamarca. De ninguna manera se toca el 60 % que está establecido, y que ya hemos votado y tampoco se acrecienta el 40 % que le corresponde a la Universidad de Tucumán, en primera instancia y a las demás universidades del país, después.

Lo único que interpreto a través de la argumentación del señor senador por Tucumán, es que se trata de eliminar el canon, y sobre eso

ha hecho una argumentación por demás convincente. Tener que dividir 400 kilómetros cuadrados —no estoy seguro si es la cifra que dio el señor senador— en pertenencias mineras para adaptarlas al Código de Minería, significa una erogación tan extraordinaria que no veo el beneficio que pueda recibir Catamarca a través del pago de un canon, sobre todo y fundamentalmente —como lo ha hecho notar el señor senador por Tucumán— cuando ella misma estaría pagándolo, es decir, que lo sacaría de su propio bolsillo para volver a ingresarlo.

Creo, entonces, que si no hay contribuciones que determine el Código de Minería, es inoficioso incorporar a la ley esta disposición, ya que si la división de las pertenencias mineras, para adaptarlas a la disposición de nuestro Código de Minería, no traería como resultado económico la fortificación de las arcas fiscales de Catamarca, que es el gran pensamiento que tiene en vista el señor senador Bazán, entiendo que está bien la supresión que propone mi colega por Tucumán.

Sr. Bazán. — Creo haber entendido, en la misma forma que el señor senador por Tucumán, las palabras de nuestro distinguido colega el señor senador García y lamento no haber sido lo suficientemente claro para que el señor senador advierta que no es eso lo que pienso o que tema que se merme el porcentaje del 60 % que corresponde a mi provincia.

Lo que digo es que Catamarca no puede renunciar al derecho de cobrar el canon. Y en lo que respecta a que tendría que sacar dinero de su bolsillo para pagarse a sí misma, no creo que sea del todo exacto, porque no lo sacaría de su bolsillo, sino del bolsillo del ente.

Además, no creo que sea un inconveniente tan tremendo la división de las pertenencias para cobrar el canon. Aquí tenemos el informe que nos da cifras, que nos da cálculos que comprueban que el otro problema sería insignificante ante la magnitud de éste que se ha tratado. Por lo tanto, me opongo a que se suprima la facultad irrenunciable de la provincia de Catamarca para cobrar el canon minero.

Sr. García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. García. — Si yo contara con la aprobación de mi compañero de representación, el señor senador Juárez, que me ha honrado con su apoyo, retiraría mi moción, no obstante considerar que es justa la proposición que he formulado. Lo haría solamente para no entorpecer un acuerdo que se ha traducido en este proyecto de ley, que fue discutido por las partes y al que se le dio la forma con que ahora viene a consideración del Senado.

Mis observaciones tendían simplemente a perfeccionar el texto de la ley con una finalidad práctica, que favorece también a la entidad

que se forma; pero si esto puede dar lugar a una discusión entre representantes de Catamarca y de Tucumán, retiro mi proposición, señor presidente.

Sr. Juárez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Juárez. — Desde luego que el señor presidente del bloque ha planteado este problema en términos tan elevados que me siento un poco cohibido para seguir insistiendo en un planteo que lo creo muy justo. Me hago solidario entonces con el pensamiento del señor presidente del bloque, mas quiero manifestar una sola cosa: este proyecto ha sido elaborado por representantes de una provincia y de una institución de cultura de la República. Cualquiera sea el monto que pierda una de las partes, va en bien del país. Esa suma no va a ingresar a ninguna arca particular, sino que propende a levantar una ciudad universitaria a la que concurrirán los hijos de Catamarca, en plenitud de derechos, a frecuentar sus aulas y adquirir técnica y cultura, lo que redundará también en beneficio de la industria y desarrollo minero de Catamarca.

Este fondo está destinado para que las universidades argentinas puedan fortificarse, construir sus laboratorios y levantar sus aulas, para que no siga ocurriendo lo que pasa actualmente, en que hay jóvenes argentinos que no pueden absorber las enseñanzas de sus maestros con amplitud y profundidad.

Sr. Bazán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Bazán. — Mis expresiones no han querido en ningún momento retacear, por parte de la provincia de Catamarca, la participación que tiene la Universidad de Tucumán en los beneficios de esta empresa. Eso lo sabemos, y se ha discutido y puntualizado bien durante las tratativas entre las dos partes.

No me extendiendo más, señor presidente. Sólo quiero agregar que reconozco y agradezco —y conmigo toda Catamarca— la labor cultural que desarrolla la Universidad de Tucumán, a la que concurren hijos de catamarqueños, que reciben interesantes beneficios en ese sentido. Quiero, sí, y en esto soy fiel al mandato de mi pueblo, defender un derecho que considero irrenunciable de Catamarca, cual es el de cobrar el canon minero; y no bajemos a las cosas pequeñas, como son las de estar fijándonos en centavos cuando se trata de contribuir a soluciones de fondo de una provincia argentina.

Agradezco profundamente a los señores senadores por Tucumán el haber retirado la proposición, porque ello significa que tienen una extrema sensibilidad y total comprensión del problema; y estoy completamente satisfecho de que al final se hayan puesto de acuerdo y que

este proyecto dentro de pocos minutos sea sancionado por la Honorable Cámara, terminándose así un problema —no digo conflicto— existente entre dos provincias hermanas, que integran la unidad social, económica y política de la República, que no deben estar separadas nunca y que, como dijo recién el señor senador por Tucumán, deben dar ejemplo de solidaridad a todo el pueblo de la República.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Pocas palabras voy a decir, no para ahondar el problema en discusión, sino simplemente para hacer un pequeño agregado al artículo, que podría salvar dificultades de orden administrativo.

El artículo 21 establece que los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravamen, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, sin aclarar —y a eso tiende el agregado que propongo— que también deben estar exceptuadas, junto con el pago del canon, las tasas retributivas de servicios públicos. Mañana esta entidad podrá tener una agencia en la ciudad de Catamarca y acogiendo a la ley podría no pagar una tasa municipal de alumbrado, limpieza, etcétera.

Pido se agreguen al final del artículo las palabras «y de las tasas retributivas de servicios públicos».

Sr. Presidente (Guido). — ¿Acepta el agregado la comisión?

Sr. Bayol. — La comisión acepta, pero entiendo que debe tratarse de servicios públicos efectivamente prestados.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a leer el artículo 21 en la forma en que ha quedado redactado.

Sr. Secretario (Sbarra). — (*Leyendo*): Artículo 21: «Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería y de las tasas retributivas de servicios públicos efectivamente prestados».

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el artículo 21 en la forma que ha sido leído por Secretaría.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 22 y 23.

Sr. Melani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Melani. — Señor presidente: solicito se reconsidere el inciso c) del artículo 18, pues deseo

proponer al final del mismo una pequeña modificación, ya que es mi propósito que exista unidad entre el espíritu y la letra del proyecto de ley que consideramos.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Córdoba.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Melani. — Pido la palabra.

Propongo que el inciso c) del artículo 18 diga: «Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %) se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.» Se reemplazarían las palabras «del país» por «del Estado», señor presidente.

Sr. Bayol. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el inciso c) del artículo 18 con la sustitución propuesta por el señor senador por Córdoba y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se enuncia y aprueba en particular el resto del proyecto.

Sr. Presidente (Guido). — Queda sancionado el proyecto de ley.

Se hará la comunicación correspondiente a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Bazán. — Pido la palabra.

Es para solicitar que, dada la urgencia en la sanción del presente proyecto de ley, se haga inmediatamente la comunicación a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Guido). — La Presidencia procederá en esa forma señor senador.

22

EQUIPO DE RADIOTERAPIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL PROVINCIAL DE RIO CUARTO (CORDOBA)

Sr. Presidente (Guido). — Corresponde considerar el orden del día 115.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Viscay). — (*Leyendo*):

(Orden del día número 115)

Despacho de las comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en